# QUIERO VER UN CAMBIO
# O
# MI BOLIVIA SOÑADA

SANTIAGO XAVIER
TERCEROS PAVISICH

Autor del libro: Santiago Xavier Terceros Pavisich
Nombre del libro: Quiero ver un cambio o Mi Bolivia soñada
Aviso de Derechos de Autor

Se permite la distribución gratuita y digital de esta publicación, siempre y cuando se respeten las siguientes condiciones:

No se permite la reproducción total o parcial de esta publicación con fines comerciales.

No se permite almacenar esta publicación en un sistema de recuperación de datos para su redistribución con fines lucrativos.

Cualquier forma de distribución debe mantener este aviso de derechos de autor y citar al editor de acuerdo con las leyes de derechos de autor aplicables.

Publicado por: Santiago Xavier Terceros Pavisich

Diseño del texto de: Santiago Xavier Terceros Pavisich

Fotografias y portada: Patricio Romay Rabaj

Depósito Legal: 8-1-6337-2023

ISBN-13: 978-9917-0-3437-7





SANTIAGO XAVIER TERCEROS PAVISICH

# QUIERO VER UN CAMBIO

# O

# MI BOLIVIA SOÑADA

*Fotografía: Patricio Romay Rabaj*





# QUIERO VER UN CAMBIO
# O
# MI BOLIVIA SOÑADA

SANTIAGO XAVIER TERCEROS PAVISICH

*Fotografía: Patricio Romay Rabaj*

*Para mis hijos, Franco Felipe y José Agustín, que me enseñan todos los días que su futuro y sus sueños son mas grandes que la imaginación que puedo tener y que lo merecen hasta mi último suspiro.*

*Para Francisco Javier y María Lina, mis padres, que me regalaron principios y valores cuando yo aún no podía entender el precio de las cosas, mucho menos de las ideas y de los sueños.*

*Para vos, que abrís esta página con esperanza de un futuro mejor.*

# Prólogo

Ronaldo Vaca Pereira Rocha

A pesar de la profunda decepción y del cansancio extremo que nos ha producido el acontecer político boliviano en las últimas dos décadas, algunos no abandonamos el sueño de construir un país mejor. Cuando escribo un "país mejor" me refiero a un país con menos discriminación y con más inclusión, con menos corrupción y con más oportunidades, con menos incertidumbre y con mejor calidad de vida. Podría seguir enumerando pero confiaré que usted lector/a, entenderá a qué tipo de "país mejor" me refiero.





Es movido por este sueño compartido, que Santiago Terceros se lanza en estas páginas a señalarnos una alternativa -o un set de alternativas- para reencauzarnos en otra dirección. En los primeros capítulos de su texto encontramos temáticas que no nos son extrañas: la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, la reforma judicial y la necesidad de un Estado transparente y eficiente. Sin embargo, a diferencia de la retórica política de siempre, cada capítulo detalla propuestas y ejemplos concretos como guía en este reencauce del Estado Plurinacional hacia ese soñado "país mejor". Seguidamente, el autor aborda dos temas de corte más teórico y de aplicación a largo plazo pero sin perder esa conexión con lo práctico, lo posible, lo realizable. La propuesta de un modelo económico diferente y de un modelo de país diferente son en esencia los cambios que él y muchos queremos ver en Bolivia.

Entre las acciones que Santiago considera fundamentales para este reencauce yo destaco: el cambio cultural como piedra angular de todo tipo de reforma y reconstrucción. Un verdadero reajuste de la "brújula ética" del país es lo que nos permitirá encontrar la salida del laberinto de la corrupción; quizás nuestro lastre más pesado. El cierre -o el mayor acortamiento posible- de la brecha digital, no solo dará acceso a propuestas de gobierno con mayor transparencia y participación en la gestión pública, sino también permitirá impulsar a las generaciones nuevas hacia los retos que el siglo XXI ya tiene hace tiempo en la mesa. La priorización de

la libertad como el valor fundamental para el desarrollo económico y humano: la libertad de iniciativa privada en la economía y la libertad de expresión y opinión en lo social. Finalmente, la promoción de la igualdad como el otro valor fundamental para el desarrollo: la igualdad de los ciudadanos ante una justicia imparcial, eficiente y libre de corrupción, así como también la apertura de oportunidades para todos los ciudadanos motivándolos a la sana competencia, la innovación y el crecimiento en todos sus sentidos.

Siguiendo sobre esta base, Santiago nos propone reorientar el modelo de Estado hacia el "liberalismo desarrollista". Es decir, el retorno a los principios básicos del liberalismo pero convirtiendo al Estado en un generador de condiciones y oportunidades para el desarrollo de la iniciativa privada. El objetivo final es pasar de un Estado que entorpece, obstaculiza y desmotiva al emprendedor, a uno dedicado a encaminar a sus ciudadanos hacia el éxito económico.

En lo que seguramente será la parte más polémica de su texto, Santiago apunta a fallas en el diseño del Estado Plurinacional y propone la concepción de la Nación Cruceña como una posibilidad real dentro de un modelo que reconoce múltiples naciones en el territorio. Partiendo del hecho que la constitución actual no nos representa plenamente y que la plurinacionalidad no existe en la práctica cotidiana del Estado, la pregunta es válida: ¿Sólo pueden ser "naciones" las culturas y





los imaginarios colectivos precolombinos? Es en este contexto que el autor propone remodelar Bolivia desde una "plurinacionalidad práctica".

Hace mucho tiempo que la idea de que "el futuro de Bolivia está en Santa Cruz" ha dejado de ser una frase cliché para convertirse en una realidad concreta y comprobable. Por esto, la viabilidad de cualquier proyecto para el Estado Plurinacional debe necesariamente no solo representar e incluir de forma práctica a Santa Cruz, sino además abrirle la posibilidad de generar propuestas hacia el resto del país. Santa Cruz -y por extensión el oriente- tarde o temprano será quien marque las pautas del rumbo nacional, así como lo hicieron la capital hasta el siglo XIX y la sede de gobierno en el siglo XX. Mientras más se resista el actual Estado Plurinacional a esta idea, más rezagada quedará Bolivia en su camino al desarrollo y en consecuencia más deprimida seguirá nuestra ciudadanía. Por ello es importante leer, discutir y aportar a propuestas como las que Santiago Terceros nos comparte en estas páginas, que miran sin miedo al futuro y propone sin tapujos soluciones prácticas para un país que está nuevamente en el camino del desfiladero.

*Fotografía: Patricio Romay Rabaj*





***PARTE 1***

***PROPUESTAS PARA LA***

***BOLIVIA DEL BICENTENARIO***

*Fotografía: Patricio Romay Rabaj*

CAPÍTULO UNO

# Transformando Nuestro País: Una Propuesta Integral para Combatir la Corrupción

## Introducción

En nuestra incansable búsqueda por construir un país más equitativo, transparente y justo, nos encontramos con uno de los desafíos más apremiantes y perniciosos que afectan nuestra sociedad: la corrupción. La promesa de un futuro donde la ética y la responsabilidad pública sean los cimientos de una nación próspera y digna de confianza es, sin duda, una visión poderosa. En este

capítulo, me comprometo a presentar una propuesta integral y ambiciosa que aborde el problema de la corrupción desde sus raíces y nos encamine hacia esa visión transformadora.

La corrupción, como un cáncer social que erosiona los fundamentos de la justicia y la equidad, es un fenómeno que ha afectado a sociedades en todo el mundo. Es una fuerza que socava la confianza en nuestras instituciones, limita el acceso a recursos y oportunidades, y distorsiona el desarrollo sostenible. Es evidente que, para construir un país donde la igualdad de oportunidades sea una realidad palpable, debemos enfrentar este problema de manera decidida y enraizada.

En este sentido, mi objetivo primordial es ofrecer una hoja de ruta clara y comprensiva que aborde los diversos aspectos que sustentan la corrupción y nos conduzca hacia un futuro donde prevalezcan los valores de la ética y la integridad. Reconozco que la solución no es simple ni rápida; por el contrario, requiere un enfoque multidimensional que abarque áreas cruciales de nuestra sociedad.

Para lograr una transformación real, es esencial partir de la base misma de nuestra sociedad: la educación. Entender que la corrupción no es una fatalidad, sino una elección ética, nos permite redefinir valores y actitudes arraigadas. Mi propuesta incluye una reforma educativa sustancial que no solo fortalezca las competencias





académicas, sino que también fomente valores éticos desde una edad temprana. Las materias de ética y ciudadanía deben ser ampliadas y enriquecidas, permitiendo que los estudiantes comprendan la importancia de la honestidad, la transparencia y la responsabilidad en su vida diaria.

Al mismo tiempo, es fundamental enfocar nuestra atención en la tecnología como una herramienta poderosa en nuestra lucha contra la corrupción. El blockchain, una tecnología de registro inmutable y descentralizado, puede revolucionar la forma en que gestionamos y supervisamos las transacciones financieras y administrativas. La transparencia y la trazabilidad que ofrece el blockchain pueden ser utilizadas para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera honesta y efectiva.

Sin embargo, una transformación sostenible no puede lograrse únicamente a través de la educación y la tecnología. La rendición de cuentas y las reformas institucionales son componentes esenciales en esta travesía. Propongo un sistema de control cruzado, donde distintos actores del gobierno y de la sociedad civil trabajen juntos para supervisar y auditar las acciones gubernamentales. Este enfoque permite evitar la concentración de poder y promueve la transparencia en todas las etapas del proceso.

En el corazón de esta propuesta reside el cambio cultural. Superar la tolerancia hacia la corrupción y

reforzar la integridad como un valor fundamental de nuestra sociedad es un desafío significativo, pero no insuperable. Reconozco que la resistencia hacia el cambio puede ser obstinada, especialmente entre aquellos que se benefician de prácticas corruptas. Sin embargo, a través de incentivos positivos, narrativas de éxito y la promoción de líderes éticos, podemos moldear una cultura que repudie la corrupción y celebre la integridad.

En resumen, este capítulo se sumerge en una exploración exhaustiva y comprometida para erradicar la corrupción desde sus raíces. La propuesta abarca la educación, la tecnología, la rendición de cuentas y la reforma institucional, buscando transformar nuestra sociedad en un modelo de integridad y equidad. En cada paso de esta travesía, nos acercamos a un futuro donde nuestra nación brille como un faro de esperanza y progreso, guiada por los valores que nos unen en la lucha contra la corrupción.

## Educación: Forjando Valores en las Nuevas Generaciones

La lucha incansable contra la corrupción debe encontrar su punto de partida en las aulas de nuestras escuelas. Es aquí donde se moldean las mentes jóvenes y se forjan los cimientos de una sociedad futura. Pero para lograr una transformación real, debemos reconocer que la corrupción no es un destino inmutable, sino una elección moral que puede ser desafiada y cambiada. Mi





propuesta se enfoca en un enriquecimiento del sistema educativo que trasciende la mera instrucción académica para abordar los valores éticos desde la infancia misma.

Para lograrlo, es imperativo repensar y fortalecer el enfoque en la instrucción cívica y ética en nuestras escuelas. Si bien es cierto que el conocimiento académico es esencial, también lo es el cultivo de una conciencia ética sólida que guíe las decisiones y acciones de los jóvenes en su vida diaria. A través de materias dedicadas a la ética y a la ciudadanía, los estudiantes deben ser expuestos a reflexiones y debates sobre la importancia de la honestidad, la transparencia y la responsabilidad en todas las esferas de la vida.

No se trata simplemente de transmitir conocimientos teóricos, sino de fomentar la internalización de estos valores. La educación ética debe estar acompañada de ejemplos concretos y actividades prácticas que permitan a los estudiantes explorar y comprender cómo estos valores se aplican en situaciones reales. Mediante discusiones abiertas, casos de estudio y ejercicios de toma de decisiones éticas, se puede cultivar un entendimiento profundo de cómo sus acciones individuales impactan en el bienestar colectivo.

La educación también debe destacar la importancia de lo público como un patrimonio compartido por todos. Es esencial transmitir la idea de que los recursos y las instituciones públicas son vitales para el funcionamiento

de una sociedad justa y equitativa. Esto implica inculcar una mentalidad de responsabilidad y cuidado hacia los bienes comunes, así como rechazar el egoísmo y la búsqueda del beneficio personal a expensas de los demás.

La empatía es otra herramienta crucial en la lucha contra la corrupción. Los programas educativos deben ayudar a los estudiantes a comprender las consecuencias devastadoras que la corrupción puede tener en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad en su conjunto. A través de historias, testimonios y análisis de casos, los estudiantes pueden adquirir una comprensión profunda de cómo la corrupción socava la justicia, limita el acceso a oportunidades y perpetúa la desigualdad.

Para ilustrar cómo esta propuesta podría tomar forma en la práctica, consideremos un ejemplo concreto. Imaginemos un programa educativo en una escuela secundaria que incluye un módulo dedicado a la ética y la lucha contra la corrupción. En este módulo, los estudiantes podrían estudiar casos históricos y contemporáneos de corrupción, analizando cómo estas prácticas han afectado a las personas y a las comunidades. A través de debates y discusiones guiadas, los estudiantes podrían explorar diferentes perspectivas sobre la corrupción y su impacto.

Además, podrían participar en ejercicios prácticos que simulen situaciones éticas complejas. Por ejemplo, podrían enfrentarse a dilemas en los que deben decidir





entre actuar de manera honesta y transparente o ceder a la tentación de obtener ganancias personales injustas. Estos ejercicios no solo desarrollarían sus habilidades de toma de decisiones éticas, sino que también los ayudarían a comprender las implicaciones de sus elecciones en un contexto más amplio.

En última instancia, esta propuesta busca transformar la educación en un catalizador para un cambio cultural significativo en nuestra sociedad. La lucha contra la corrupción no es un camino fácil ni corto, pero a través de una educación ética sólida, podemos sembrar las semillas de una nueva generación de ciudadanos comprometidos con la integridad y la justicia. Al invertir en la formación de valores desde temprana edad, estamos creando las bases para un futuro donde la corrupción sea rechazada en todas sus formas y donde la ética y la responsabilidad pública sean los pilares de una nación fuerte y confiable.

Tecnología y Transparencia: Un Aliado en la Lucha

La incorporación de la tecnología en nuestra lucha constante contra la corrupción introduce una dimensión innovadora y potente en nuestro esfuerzo por crear un sistema más transparente y confiable. En este capítulo, exploraremos cómo la tecnología, en particular el blockchain, puede transformar la manera en que abordamos el problema de la corrupción en nuestras instituciones públicas y privadas. Mi propuesta busca

aprovechar al máximo el potencial de estas herramientas digitales para construir una sociedad más justa y libre de corrupción.

El blockchain, una tecnología de registro distribuido e inmutable, ha demostrado su capacidad para revolucionar la forma en que se gestionan las transacciones y se mantienen registros. Este innovador sistema ofrece una cadena de bloques en la que cada transacción se registra de forma transparente y permanente, lo que imposibilita la alteración o el borrado retroactivo. Esta característica intrínseca del blockchain lo convierte en una herramienta excepcional para construir sistemas de seguimiento y verificación de transacciones, especialmente en áreas que son susceptibles a prácticas corruptas.

Un ejemplo concreto de cómo el blockchain puede ser aplicado es en la administración de fondos públicos. Imaginemos un sistema en el que cada gasto público sea registrado en una cadena de bloques accesible al público. Cada transacción, desde la asignación de presupuesto hasta la adquisición de bienes y servicios, sería inmutable y rastreable. Esto significa que cualquier ciudadano podría verificar en tiempo real cómo se están utilizando los recursos públicos y detectar cualquier anomalía o desviación. Este nivel de transparencia no solo disuadiría a aquellos que intentan malversar fondos, sino que también empoderaría a la sociedad para exigir cuentas a sus líderes y funcionarios.





Otra área en la que el blockchain puede marcar una diferencia significativa es en la contratación y gestión de recursos. En muchos casos, la corrupción se introduce a través de prácticas fraudulentas en los procesos de contratación, donde las decisiones se toman en secreto y sin supervisión adecuada. Implementar un sistema de contratación basado en blockchain podría cambiar radicalmente esta dinámica. Cada paso del proceso, desde la presentación de propuestas hasta la selección del proveedor y la ejecución del contrato, se registraría de manera inmutable en la cadena de bloques. Esto aseguraría que las decisiones se tomen de manera transparente y que todas las partes involucradas puedan verificar la integridad del proceso.

El gobierno digital es otro componente esencial en la lucha contra la corrupción. La digitalización de los procesos gubernamentales puede eliminar las brechas en las que la corrupción suele encontrar refugio. Al trasladar los trámites y procesos a plataformas en línea, se reduce la interacción directa entre funcionarios y ciudadanos, lo que disminuye las oportunidades para prácticas corruptas. Además, la automatización de procesos puede reducir la discrecionalidad y aumentar la eficiencia, lo que limita el margen para decisiones subjetivas que puedan ser manipuladas de manera corrupta.

Un ejemplo ilustrativo del poder del gobierno digital es la implementación de sistemas de presentación de

declaraciones y pago de impuestos en línea. En lugar de depender de interacciones cara a cara con funcionarios fiscales, los contribuyentes pueden presentar sus declaraciones y realizar pagos de manera electrónica. Esto no solo agiliza el proceso, sino que también reduce el riesgo de sobornos o extorsiones. Además, la digitalización permite la automatización de la revisión y verificación de datos, lo que disminuye la posibilidad de manipulación de información para evadir impuestos.

En resumen, la tecnología, especialmente el blockchain y el gobierno digital, ofrece un camino prometedor en la lucha contra la corrupción. Estas herramientas no solo pueden mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también empoderan a los ciudadanos para participar activamente en la supervisión de los procesos públicos y privados. Al adoptar estas soluciones tecnológicas y fomentar una cultura de innovación en la gestión pública, podemos sentar las bases para una sociedad más justa, equitativa y libre de corrupción.

Rendición de Cuentas y Reforma Institucional

La consolidación de una sociedad justa y libre de corrupción requiere un enfoque integral que aborde tanto la supervisión y fiscalización como la reforma institucional en todos los niveles de gobierno. Mi propuesta se dirige a garantizar que las instancias encargadas de control y vigilancia operen de manera imparcial y efectiva,





asegurando la rendición de cuentas y la transparencia en todas las acciones gubernamentales.

Una de las claves fundamentales para la efectividad de esta propuesta es la implementación de un sistema de control cruzado. Esto implica que las instancias de supervisión y fiscalización no deben estar en manos exclusivamente del partido en el poder o de la mayoría parlamentaria. En cambio, propongo que la primera minoría, es decir, el principal partido de oposición en el parlamento, juegue un papel esencial en estas funciones. Al hacerlo, se evita que el control y la fiscalización sean utilizados como instrumentos de obstaculización política, en lugar de servir a su propósito original de garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión pública.

Un ejemplo concreto de cómo esto podría funcionar en el contexto boliviano es a través de una comisión de control y fiscalización liderada por representantes de la primera minoría parlamentaria. Esta comisión tendría la responsabilidad de revisar de manera regular y exhaustiva las actividades y decisiones gubernamentales. Su enfoque estaría en asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y que no haya espacio para prácticas corruptas. Al tener una representación significativa de la oposición en esta comisión, se reduce el riesgo de sesgo partidista y se promueve una supervisión imparcial.

Además, la participación de expertos independientes y organizaciones no gubernamentales en la supervisión es esencial para garantizar la objetividad y la integridad del proceso. Estas entidades pueden aportar su experiencia y conocimientos para evaluar de manera imparcial las políticas, programas y decisiones gubernamentales. Por ejemplo, se podría establecer un consejo asesor compuesto por expertos en áreas relevantes, como economía, derecho y políticas públicas. Este consejo tendría la tarea de analizar y emitir recomendaciones sobre las acciones del gobierno, brindando una perspectiva imparcial y técnica.

La reforma institucional también desempeña un papel crucial en la lucha contra la corrupción. Para garantizar que los cargos sean ocupados por individuos comprometidos con la integridad y el bienestar de la sociedad, propongo una revisión completa de los procesos de elección y selección. En lugar de depender únicamente de la afiliación política o el favoritismo, los cargos deberían ser otorgados basándose en méritos, experiencia y compromiso con la ética pública.

Un enfoque podría ser establecer comités de selección independientes y transparentes para ciertos cargos clave en el gobierno. Estos comités estarían compuestos por expertos y líderes de la sociedad civil, y serían responsables de evaluar a los candidatos y recomendar a los más idóneos para ocupar los puestos. Esta selección basada en méritos y compromiso con la integridad





fortalecería la calidad y la idoneidad de los líderes en el gobierno, reduciendo la posibilidad de nepotismo y corrupción.

En resumen, la propuesta para abordar la rendición de cuentas y la reforma institucional se basa en un enfoque de control cruzado y participación activa de actores externos. Al involucrar a la oposición parlamentaria, expertos independientes y organizaciones no gubernamentales en la supervisión y fiscalización, se garantiza una mayor imparcialidad y efectividad en la vigilancia de las acciones gubernamentales. Asimismo, la revisión de los procesos de elección y selección de cargos clave contribuirá a establecer un gobierno más ético y comprometido con el bienestar de la sociedad.

Cambio Cultural y Desafíos a Superar

La transformación hacia una sociedad libre de corrupción no solo implica cambios en las estructuras y políticas gubernamentales, sino también un cambio profundo en la cultura y los valores arraigados en la sociedad. Reconocer y superar la tolerancia a la corrupción es un paso fundamental para avanzar hacia una nueva era de integridad y transparencia en todas las esferas de la vida pública y privada.

Promover la integridad como un valor central requiere un esfuerzo sostenido a nivel educativo, institucional y social. Un ejemplo concreto de cómo esto puede lograrse

es a través de campañas de concienciación y educación pública. Estas campañas podrían incluir testimonios de personas que han sufrido las consecuencias de la corrupción, así como ejemplos de individuos y comunidades que han prosperado al optar por la honestidad y la transparencia. Al destacar las historias de éxito basadas en la integridad, se crea un sentido de aspiración hacia un nuevo paradigma de valores.

Es importante reconocer que este proceso de cambio cultural no será fácil y estará marcado por desafíos. La resistencia de aquellos que se benefician de prácticas corruptas es un obstáculo real que debe abordarse de manera estratégica. Aquellos que han estado involucrados en corrupción pueden resistirse al cambio debido a la pérdida de privilegios y ventajas ilegítimas. Aquí es donde la combinación de medidas legales, políticas y sociales puede ser efectiva.

Para contrarrestar la resistencia, es fundamental crear incentivos que premien la honestidad y el servicio público. Estos incentivos pueden variar desde recompensas tangibles, como bonificaciones por desempeño ético en el sector público, hasta reconocimientos públicos y reconocimientos en la comunidad. Un ejemplo podría ser la implementación de un sistema de premios a la integridad, donde individuos y organizaciones que demuestren un compromiso continuo con la ética y la transparencia sean reconocidos y recompensados.





Además, establecer sanciones más severas para los actos de corrupción puede disuadir a quienes consideran participar en prácticas corruptas. Las leyes deben ser claras y aplicables, y los procesos judiciales deben ser transparentes y justos. Un sistema judicial sólido y confiable es esencial para garantizar que los actos de corrupción sean castigados de manera adecuada, lo que a su vez envía un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada.

El cambio cultural también debe incluir la promoción de valores de ética y responsabilidad desde una edad temprana. La educación en valores debe comenzar en las escuelas y ser reforzada a lo largo de la vida. Implementar programas educativos que enfaticen la importancia de la honestidad, la transparencia y el servicio público puede sentar las bases para una nueva generación de ciudadanos comprometidos con la integridad.

En resumen, la transformación hacia una sociedad libre de corrupción requiere un cambio cultural profundo y sostenido. Superar la tolerancia a la corrupción y promover la integridad como un valor central implica la implementación de campañas de concienciación, la creación de incentivos que premien la honestidad y el servicio público, y la aplicación de sanciones más severas para los actos de corrupción. Este camino estará marcado por desafíos, pero es esencial para lograr un cambio verdadero y duradero en la mentalidad de la sociedad.

## Conclusión

En conclusión, enfrentar el desafío de la corrupción es posible y necesario. A lo largo de este discurso, hemos explorado una propuesta ambiciosa que busca abordar las raíces del problema de manera integral y transformar nuestra sociedad en una donde la ética y la responsabilidad pública sean los pilares fundamentales. A través de la educación, la tecnología, la reforma institucional y un cambio cultural profundo, podemos sentar las bases para una nación más justa, transparente y equitativa.

La corrupción no es una característica intrínseca de la naturaleza humana, sino más bien una elección moral. Comprender esta premisa es crucial para que podamos cambiar las actitudes y comportamientos arraigados en nuestra sociedad. Hemos discutido la importancia de un enfoque educativo que vaya más allá de la instrucción académica, incorporando valores éticos desde una edad temprana. Fortalecer las materias de instrucción cívica y ética, así como fomentar la empatía y la comprensión de las consecuencias de la corrupción, son pasos esenciales para moldear una nueva generación de ciudadanos comprometidos con la integridad.

Además, hemos explorado cómo la tecnología, en particular el blockchain, puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra la corrupción. La





implementación de sistemas de seguimiento y verificación de transacciones puede garantizar la transparencia en la administración de fondos públicos y otros procesos gubernamentales. Ejemplos como estos demuestran cómo la innovación tecnológica puede desempeñar un papel fundamental en la construcción de un gobierno más responsable y confiable.

La rendición de cuentas y la reforma institucional también ocupan un lugar central en esta propuesta. La idea de establecer instancias de supervisión y fiscalización en manos de la primera minoría en lugar del partido mayoritario busca garantizar un control imparcial y eficiente. Se busca evitar la obstaculización y promover la supervisión efectiva de la gestión pública. Al mismo tiempo, la revisión de los procesos de elección y toma de decisiones contribuirá a reducir el riesgo de nepotismo y favorecimiento en la administración pública.

El cambio cultural, aunque desafiante, es un componente esencial en esta transformación. Superar la tolerancia a la corrupción y promover la integridad como un valor central requiere esfuerzo y perseverancia. Sin embargo, hemos destacado la importancia de crear incentivos que premien la honestidad y el servicio público, así como la necesidad de enfrentar la resistencia de aquellos que se benefician de prácticas corruptas. Ejemplos concretos, como campañas de concienciación y programas educativos, pueden inspirar a la sociedad a adoptar una nueva mentalidad basada en la ética.

En última instancia, esta propuesta se basa en la firme creencia de que la corrupción no es un destino inmutable, sino un problema que podemos abordar con determinación y enfoque. Si todos nos comprometemos a construir un país basado en la honestidad, la transparencia y la justicia, estaremos pavimentando el camino hacia un futuro en el que nuestras instituciones reflejen los valores más nobles de nuestra sociedad. La corrupción no puede prevalecer si nos unimos en este esfuerzo conjunto por un cambio real y duradero. Juntos, podemos forjar un país en el que la integridad sea la columna vertebral de nuestra identidad y un ejemplo inspirador para el mundo.

*Fotografía: Patricio Romay Rabaj*

CAPÍTULO DOS

# Trazando un Horizonte Seguro: Estrategias Integrales en la Lucha contra el Narcotráfico

## Introducción

En los rincones más oscuros de la sociedad, donde la violencia y la ilegalidad encuentran un terreno fértil, el narcotráfico ha arraigado sus tentáculos con una fuerza avasalladora. En medio de este desafío sin precedentes, emerge la necesidad apremiante de una respuesta contundente y transformadora. En este capítulo, exploraremos en profundidad la problemática

del narcotráfico y propondremos un enfoque integral que busca enfrentar esta amenaza desde sus cimientos y transformar radicalmente el panorama de seguridad en nuestra sociedad.

El narcotráfico no es simplemente un fenómeno local; es una red internacional que opera con astucia y crueldad en múltiples niveles. Desde la producción y el transporte hasta la distribución y el lavado de dinero, el narcotráfico se ha convertido en una empresa transnacional, multimillonaria y muy presente en la vida cotidiana de las personas que corrompe instituciones, arruina vidas y socava los cimientos de la sociedad. Enfrentar esta amenaza requiere un enfoque audaz y multifacético que no solo se limite a la represión, sino que también aborde las causas profundas que permiten que el narcotráfico prospere.

El primer paso en esta transformación radica en reconocer que el problema del narcotráfico no puede resolverse con enfoques convencionales. Propongo una medida audaz pero necesaria: la disolución de la Policía Boliviana y la creación de la Guardia Nacional. Esta reestructuración no es simplemente un cambio de nombre, sino un compromiso profundo de forjar una nueva identidad y una nueva misión para las fuerzas encargadas de mantener la seguridad en nuestro país. La Guardia Nacional se nutrirá de líderes altamente capacitados y comprometidos, seleccionados a través de rigurosos procesos de evaluación y formación. Su enfoque





se centrará en garantizar la seguridad ciudadana y en enfrentar de manera directa la amenaza del narcotráfico, pero también en construir la confianza y la colaboración con las comunidades a las que sirve.

Una estrategia fundamental en esta lucha contra el narcotráfico es la descentralización del control del territorio. En lugar de una estructura centralizada, propongo la creación de comandos regionales de la Guardia Nacional, cada uno encargado de una división geográfica específica. Esta subdivisión permitirá un enfoque más preciso y efectivo en la vigilancia y el combate del narcotráfico en áreas específicas. Por ejemplo, en ciudades con una alta incidencia de tráfico de drogas, se establecerán comandos dedicados a controlar la logística del narcotráfico y desmantelar sus redes locales. Esta estructura descentralizada también fomentará la colaboración con las comunidades y permitirá una respuesta más ágil y efectiva a las necesidades de seguridad locales.

El narcotráfico no es solo el cultivo y la distribución de drogas; también es un entramado complejo de logística, lavado de dinero y movimiento de recursos. Enfrentar el narcotráfico requiere una estrategia integral que aborde todas las etapas de este proceso. La Guardia Nacional se convertirá en un componente esencial en esta lucha, ya que se enfocará en controlar y desmantelar la logística del narcotráfico. Desde la compra y el lavado de dinero hasta el transporte y la distribución, esta nueva

institución será un baluarte contra las operaciones de estas redes criminales. La tecnología, la colaboración interinstitucional y la inteligencia serán herramientas clave en esta lucha incansable por debilitar las bases mismas del narcotráfico.

Enfrentar el narcotráfico no puede limitarse únicamente a las fuerzas de seguridad convencionales. Para combatir eficazmente esta amenaza, propongo una medida drástica pero necesaria: declarar la guerra al narcotráfico y entregar la lucha en áreas selváticas y rurales a las fuerzas armadas. Al igual que en una guerra, nuestras fuerzas armadas deberán enfrentar al narcotráfico con determinación y coraje, empleando todas las herramientas a su disposición para debilitar y desmantelar las operaciones de estos carteles criminales. La cooperación internacional y la participación activa en alianzas regionales serán fundamentales en esta batalla, ya que el narcotráfico es un enemigo que trasciende las fronteras nacionales.

A lo largo de este capítulo, exploraremos cada una de estas áreas con detalle, analizando ejemplos y casos de éxito en la lucha contra el narcotráfico en diferentes contextos. Cada propuesta se basa en un enfoque pragmático y audaz que busca transformar radicalmente la forma en que enfrentamos esta amenaza. Con el compromiso de construir un futuro más seguro y libre de la influencia del narcotráfico, examinaremos cómo la reestructuración institucional, la descentralización





del control territorial, el control de la logística y la participación de las fuerzas armadas pueden unirse en una estrategia unificada que debilite progresivamente a los cárteles narcotraficantes y restablezca la seguridad y la integridad en nuestras comunidades.

## Disolución de la Policía Boliviana y Creación de la Guardia Nacional

En el arduo camino hacia una nación más segura y libre de la lacra del narcotráfico, se requiere un replanteamiento audaz y radical de nuestras instituciones de seguridad. Una de las propuestas más destacadas en esta dirección es la disolución de la Policía Boliviana y su transformación en una entidad completamente nueva: la Guardia Nacional. Esta transformación no se limita a un cambio de nombre; es un paso crucial hacia la reinvención completa de cómo abordamos la seguridad en nuestro país.

La disolución de la Policía Boliviana no implica en modo alguno que los valientes hombres y mujeres que sirven en sus filas se quedarán sin trabajo. Por el contrario, se trata de redirigir sus talentos, capacidades y dedicación hacia una nueva visión de seguridad y justicia en Bolivia. Es hora de que las bases de la seguridad pública sean redefinidas y reforzadas con una perspectiva más fresca y dinámica.

La Guardia Nacional será más que un simple cambio de nombre; representará una entidad completamente nueva con un enfoque transformador. Este enfoque se basa en la premisa de que la seguridad pública debe estar arraigada en la integridad, la ética y el compromiso inquebrantable con el bienestar de la sociedad. Para lograrlo, se implementará un proceso de selección riguroso y basado en méritos, diseñado para identificar a individuos altamente competentes y moralmente íntegros.

La transformación comenzará con un proceso de selección exhaustivo que identificará a los candidatos más capacitados y comprometidos con la seguridad y la integridad. Expertos en psicología organizacional evaluarán cuidadosamente la integridad moral de los candidatos, garantizando que solo aquellos que demuestren un compromiso absoluto con el servicio público y la justicia sean seleccionados. Esta selección no solo se basará en habilidades técnicas, sino también en valores arraigados en la ética y el sentido de responsabilidad.

Es importante destacar que la disolución de la Policía Boliviana y la creación de la Guardia Nacional no es un acto impulsivo, sino un proceso cuidadosamente planificado y ejecutado. El objetivo es transformar la mentalidad y la cultura de las fuerzas de seguridad, para que sean un reflejo fiel de los valores más nobles de nuestra sociedad. Esta transformación también





implicará una inversión significativa en la capacitación y el desarrollo de habilidades de los nuevos miembros de la Guardia Nacional.

La Guardia Nacional no solo se encargará de mantener la seguridad pública, sino que también será un símbolo de confianza y profesionalismo. Su presencia en nuestras calles y comunidades transmitirá un mensaje claro de que estamos comprometidos con un futuro más seguro y justo para todos los bolivianos. Esta nueva institución será la encargada de establecer un estándar de excelencia en seguridad, arraigado en la integridad y la dedicación al servicio público.

En resumen, la disolución de la Policía Boliviana y la creación de la Guardia Nacional representan una oportunidad única para redefinir la seguridad en Bolivia. No se trata solo de cambiar un nombre, sino de reimaginar por completo cómo abordamos la seguridad y la justicia en nuestra nación. La Guardia Nacional será una entidad basada en valores, seleccionada en base a méritos y comprometida con la integridad y el servicio público. Es el paso audaz que necesitamos para construir un futuro más seguro y prometedor para todos los bolivianos.

Estructura Descentralizada y Control del Territorio

Una de las piedras angulares de la propuesta de transformación en la lucha contra el narcotráfico

y la consolidación de la seguridad en Bolivia es la implementación de una estructura descentralizada de control territorial. Este enfoque revolucionario busca alejarse de la tradicional centralización y, en su lugar, establecer divisiones territoriales dentro de la Guardia Nacional, cada una con la responsabilidad de supervisar y mantener la seguridad en áreas geográficamente delimitadas. Esta estrategia no solo permitirá un control más efectivo de las actividades delictivas, incluido el narcotráfico, sino que también garantizará una respuesta más ágil y personalizada a los desafíos de seguridad específicos de cada región.

El corazón de esta estructura descentralizada radica en la selección y formación de líderes altamente competentes y comprometidos que dirigirán cada una de estas divisiones territoriales. Estos líderes serán seleccionados siguiendo los más altos estándares del mundo, mediante un proceso de evaluación riguroso que identificará a individuos que no solo cuenten con habilidades técnicas sobresalientes, sino que también encarnen valores arraigados en la integridad, el compromiso y el servicio público.

Imaginemos un escenario en el que, por ejemplo, se establecen tres divisiones territoriales en Santa Cruz: una para la ciudad de Santa Cruz, otra para El Alto y La Paz, y una tercera para Cochabamba. Cada una de estas divisiones estaría encabezada por un líder altamente capacitado, seleccionado entre los





mejores talentos mediante un proceso de selección transparente y basado en méritos. Estos líderes no solo serían expertos en seguridad, sino que también serían individuos comprometidos con la justicia, la integridad y la responsabilidad.

La descentralización no solo se trata de distribuir la autoridad, sino también de empoderar a las comunidades locales y garantizar que las operaciones de seguridad sean contextualmente relevantes. Los líderes de cada división territorial serán expertos en comprender las dinámicas únicas de su región, lo que les permitirá adaptar las estrategias de seguridad de manera más efectiva. Esta adaptabilidad y sensibilidad local son fundamentales para combatir eficazmente el narcotráfico y otros delitos, ya que cada región presenta desafíos y características propias.

Además, esta estructura descentralizada permitirá un mayor control sobre las operaciones de seguridad y la toma de decisiones en el terreno. La respuesta a situaciones de emergencia o incidentes criminales será más rápida y eficiente, ya que los líderes de las divisiones territoriales estarán en la primera línea de toma de decisiones. Esto garantiza que las estrategias y acciones puedan adaptarse de manera oportuna y precisa a medida que surgen desafíos inesperados.

Un ejemplo concreto de cómo esta estructura descentralizada puede marcar la diferencia en la lucha

contra el narcotráfico se presenta en el control y la supervisión de las zonas rurales y selváticas donde la producción de drogas ilícitas puede estar en su apogeo. Imagine que una división territorial se establece en una región conocida por su producción de coca y narcotráfico. El líder de esta división estaría inmerso en el conocimiento de las prácticas locales y las redes criminales. Esto permitiría un enfoque estratégico y personalizado para desmantelar estas operaciones ilegales desde su núcleo.

En síntesis, la estructura descentralizada de control territorial propuesta es un componente vital en la transformación de la seguridad en Bolivia y la lucha contra el narcotráfico. Esta estrategia permite una adaptación ágil y específica a los desafíos de seguridad de cada región, empoderando a líderes altamente competentes y comprometidos en la primera línea de la toma de decisiones. La selección cuidadosa y la formación rigurosa de estos líderes garantizarán que la integridad, el compromiso y la excelencia sean los pilares de la Guardia Nacional en su tarea de garantizar un país más seguro y libre de narcotráfico.

Control de la Logística del Narcotráfico

La lucha contra el narcotráfico no se limita únicamente a la erradicación de plantaciones de coca o la persecución de los carteles. Para lograr un impacto real y duradero en la reducción del narcotráfico, es fundamental atacar





todas las etapas del negocio ilícito, incluida su logística. En esta perspectiva, la propuesta de transformación abarca la implementación de un control exhaustivo de la logística del narcotráfico, un aspecto que a menudo pasa desapercibido pero que tiene un efecto crucial en el funcionamiento y la viabilidad de estas operaciones ilícitas.

Dentro de las funciones asignadas a la Guardia Nacional, se destaca específicamente el control de la logística del narcotráfico. Esta tarea implica una vigilancia constante y eficiente de todos los procesos que rodean la producción, distribución y comercialización de drogas. A través de un sistema integral de monitoreo y supervisión, se pretende desmantelar las redes que permiten que el narcotráfico opere en la oscuridad.

Uno de los aspectos clave en este control logístico es el seguimiento y el monitoreo de los movimientos en la ciudad relacionados con la compra y venta de drogas. La Guardia Nacional, con su estructura descentralizada y líderes altamente capacitados, será capaz de implementar estrategias efectivas para identificar y rastrear los puntos de venta, los intermediarios y las rutas de distribución. Esto no solo dificultará la operación de los traficantes, sino que también disminuirá el acceso de las drogas a la población, lo que a su vez tendrá un impacto en la demanda y la rentabilidad del negocio.

Además, el control de la logística del narcotráfico implica un enfoque riguroso en el lavado de dinero, una parte fundamental de la operación de los carteles y grupos criminales involucrados en el tráfico de drogas. La Guardia Nacional tendrá la tarea de investigar y rastrear las transacciones financieras sospechosas, identificando patrones y conexiones que puedan llevar a la desarticulación de redes de lavado de dinero. Este enfoque no solo impacta en la capacidad de los traficantes para financiar sus operaciones, sino que también ataca la impunidad que a menudo rodea al lavado de dinero.

Un ejemplo concreto de cómo el control de la logística del narcotráfico puede tener un impacto significativo se refiere a la vigilancia de las rutas de transporte utilizadas por los traficantes para mover drogas y recursos relacionados. Supongamos que la Guardia Nacional identifica una ruta frecuentemente utilizada por los traficantes para transportar drogas desde las zonas de producción hasta los puntos de distribución. Mediante una acción coordinada y estratégica, los líderes de la división territorial encargada de esa área pueden implementar medidas de vigilancia y bloqueo que dificulten o incluso detengan el flujo de drogas a lo largo de esa ruta. Esto no solo interrumpe el negocio del narcotráfico, sino que también crea una percepción de riesgo que disuade a los traficantes de utilizar esa ruta en el futuro.





En resumen, el control de la logística del narcotráfico es un componente esencial en la estrategia de transformación de la Guardia Nacional en la lucha contra esta actividad ilícita. La implementación de un sistema integral de monitoreo y supervisión, junto con la estructura descentralizada y los líderes altamente capacitados, permitirá un control más completo de todas las etapas del negocio, desde la producción hasta la distribución. Atacar la logística no solo debilita las operaciones del narcotráfico, sino que también socava su rentabilidad y capacidad para operar en la impunidad.

Participación de las Fuerzas Armadas

En la lucha contra el narcotráfico, la dimensión y la gravedad del problema exigen una respuesta contundente y decidida. Ante la magnitud de este desafío, se propone una estrategia de confrontación directa, comparada a la de una guerra, en la cual las Fuerzas Armadas jueguen un papel central en la erradicación y contención del narcotráfico en el territorio boliviano. Esta medida implica abordar a los grupos narcotraficantes como enemigos en un conflicto bélico y utilizar las capacidades y recursos de las Fuerzas Armadas, incluyendo la fuerza aérea y el ejército, para enfrentar esta amenaza que socava la seguridad nacional y la estabilidad del país.

La propuesta aboga por una declaración oficial de guerra al narcotráfico, un acto simbólico que marca la seriedad y determinación con la que se abordará esta

problemática. Esta medida permitirá que las Fuerzas Armadas asuman un rol activo en la lucha contra el narcotráfico, operando en áreas rurales y selváticas donde se cultiva y produce la droga. La razón detrás de esta estrategia radica en la necesidad de una acción decidida y coordinada para enfrentar a los grupos criminales que se dedican al tráfico de drogas, a menudo con una estructura y recursos comparables a los de grupos insurgentes.

Al considerar la intervención directa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, es importante resaltar que esta medida no es una respuesta aislada, sino que está respaldada por una estrategia integral que abarca desde la selección y capacitación de los miembros de la Guardia Nacional hasta el control de la logística del narcotráfico. La participación de las Fuerzas Armadas se presenta como un último recurso, una respuesta enérgica a un problema que requiere un enfoque multifacético.

Para comprender mejor cómo la intervención de las Fuerzas Armadas puede impactar en la lucha contra el narcotráfico, podemos observar ejemplos de otros países que han implementado medidas similares. Colombia, por ejemplo, enfrentó una crisis de narcotráfico durante décadas, con grupos como el cartel de Medellín y el cartel de Cali controlando vastas regiones y generando violencia. La respuesta de Colombia involucró la participación activa de sus Fuerzas





Armadas, que colaboraron con agencias de inteligencia y otros organismos para debilitar y desmantelar estas organizaciones criminales. A través de operaciones militares conjuntas y la utilización de tecnología avanzada, Colombia logró reducir significativamente la influencia de los carteles y aumentar la presencia del Estado en áreas previamente controladas por el narcotráfico.

Otro ejemplo es México, que enfrenta un desafío similar en términos de narcotráfico y violencia. Las Fuerzas Armadas mexicanas han sido desplegadas en varias regiones del país para enfrentar a los carteles de la droga y restaurar la seguridad. Sin embargo, esta intervención no ha estado exenta de controversia debido a las preocupaciones sobre abusos de derechos humanos y la falta de resultados concretos en la reducción de la violencia. Estos ejemplos muestran que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico es una medida compleja y que debe ser implementada con un enfoque estratégico y un firme respeto por los derechos humanos.

En el contexto boliviano, la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico también plantea desafíos y consideraciones únicas. Es crucial establecer salvaguardias para garantizar el respeto de los derechos humanos y evitar abusos en la aplicación de la fuerza. Además, se debe priorizar la colaboración y coordinación con otras agencias

de seguridad y organizaciones internacionales para maximizar el impacto y la eficacia de las operaciones.

En conclusión, la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico se presenta como una medida excepcional, reservada para enfrentar una amenaza que socava la seguridad nacional y la estabilidad del país. Esta estrategia debe ser parte de un enfoque integral que incluya la transformación de la Guardia Nacional, el control de la logística del narcotráfico y el compromiso de la sociedad en su conjunto. Al aprender de los ejemplos de otros países, Bolivia puede diseñar una estrategia eficaz que combine la fuerza militar con un respeto inquebrantable por los derechos humanos y una visión clara de un país libre de los estragos del narcotráfico.

## Conclusión

En este capítulo, hemos explorado una propuesta integral para abordar uno de los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad: el narcotráfico. A través de cuatro puntos fundamentales, hemos delineado un enfoque que busca transformar la lucha contra esta amenaza en una estrategia sólida y eficaz, respaldada por cambios institucionales, medidas de control y la participación activa de las Fuerzas Armadas.





La transformación de la Policía Boliviana en la Guardia Nacional es un paso crucial para reinventar la seguridad en nuestro país. Esta reorganización va más allá del cambio de nombre; implica un proceso de selección riguroso basado en méritos y evaluación de la integridad moral de los candidatos. Los líderes de la Guardia Nacional serán seleccionados y formados siguiendo los estándares más altos del mundo, garantizando que estén comprometidos con la integridad y el servicio público.

La propuesta de una estructura descentralizada de control territorial busca aumentar la efectividad en la lucha contra el narcotráfico. Dividir las responsabilidades en áreas geográficamente delimitadas permitirá un enfoque más específico y focalizado en las operaciones. Los líderes altamente competentes en cada división asegurarán la calidad y eficacia de las operaciones, lo que se traducirá en un control más completo y preciso de las actividades delictivas.

Dentro de las funciones de la Guardia Nacional, el control de la logística del narcotráfico ocupa un lugar central. Desde la vigilancia de los procesos de lavado de dinero hasta el monitoreo de los movimientos en la ciudad relacionados con el tráfico de drogas, esta medida abarca todas las fases del negocio ilícito. La combinación de esta tarea con la estructura descentralizada fortalecerá el control sobre el ciclo completo del narcotráfico.

La estrategia de participación directa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico se fundamenta en la gravedad del problema. La intervención militar se presenta como una medida excepcional, comparada a una guerra, en la que los grupos narcotraficantes son tratados como enemigos en un conflicto bélico. Esta estrategia requiere de una declaración oficial de guerra al narcotráfico y el despliegue de las Fuerzas Armadas en áreas rurales y selváticas donde se cultiva la droga.

La combinación de estos cuatro puntos conforma una estrategia multidimensional que aborda el problema del narcotráfico desde diferentes ángulos. Esta propuesta reconoce la urgencia de erradicar esta amenaza que socava la seguridad y estabilidad del país, y busca involucrar tanto a las instituciones encargadas de la seguridad como a la sociedad en su conjunto.

Al aprender de ejemplos internacionales y considerar las especificidades de Bolivia, esta estrategia pretende enfrentar el narcotráfico con determinación, eficacia y un respeto inquebrantable por los derechos humanos. La transformación de la Policía Boliviana en la Guardia Nacional, la estructura descentralizada de control territorial, el control de la logística del narcotráfico y la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha forman un conjunto de medidas audaces que buscan cambiar el rumbo de la seguridad en nuestro país.

*Fotografía: Patricio Romay Rabaj*

CAPÍTULO TRES

# Transformación hacia la Eficiencia y Transparencia: Consejos Académicos y Gobierno Digital en la Administración Económica

## Introducción

En un mundo en constante transformación y con desafíos económicos de creciente complejidad, la búsqueda de soluciones efectivas para garantizar una administración económica sólida y transparente se convierte en una prioridad indiscutible. En este contexto, dos enfoques innovadores emergen como

manera proactiva y eficiente: los "Consejos Académicos Ciudadanos" y la implementación del "Gobierno Digital".

En un panorama caracterizado por dinámicas económicas cada vez más intrincadas y cambiantes, el papel de los expertos y su asesoramiento se torna esencial para garantizar una gestión económica sólida y efectiva. Ante esta necesidad, surge la propuesta de establecer "Consejos Académicos Ciudadanos", una estrategia que busca fusionar el conocimiento teórico y la experiencia práctica en el ámbito económico. Estos consejos, que abarcan desde el nivel municipal hasta el nacional, reúnen a una diversa gama de especialistas, desde economistas destacados hasta analistas de políticas públicas y expertos en desarrollo económico. Su función principal es brindar recomendaciones respaldadas por la investigación más reciente para enriquecer la toma de decisiones gubernamentales y promover un desarrollo económico sostenible. A través de esta colaboración entre la academia y el gobierno, se busca aprovechar tanto la innovación teórica como la comprensión práctica de los desafíos económicos, con la mirada puesta en el bienestar y la prosperidad de la sociedad en su conjunto.

La tecnología digital se ha convertido en un pilar central en todas las esferas de la sociedad, y la administración pública no es la excepción. En busca de eficiencia y transparencia, la implementación





del "Gobierno Digital" emerge como una solución contundente. Esta transformación implica la migración de los procesos gubernamentales a plataformas digitales, con el propósito de agilizar los trámites, mejorar la accesibilidad y reducir las oportunidades de corrupción. Desde pagos de impuestos hasta la gestión de documentos, esta estrategia apunta a reducir las interacciones presenciales y fomentar las transacciones electrónicas entre el gobierno y los ciudadanos. Ejemplos exitosos de países como Estonia, Singapur e India demuestran que la digitalización de servicios no solo optimiza la administración pública, sino que también fortalece la rendición de cuentas y la prevención de prácticas corruptas. Sin embargo, la implementación exitosa de esta transformación debe sortear desafíos de inclusión y brecha digital para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a estos beneficios. En este contexto, el "Gobierno Digital" se presenta como un paso esencial hacia una administración pública más transparente, eficiente y centrada en el ciudadano.

## Consejos Académicos Ciudadanos para la Administración Económica.

En un mundo en constante evolución, donde los desafíos económicos se presentan en formas cada vez más complejas y dinámicas, la importancia de contar con asesoramiento y perspectivas expertas se vuelve fundamental para garantizar una administración

económica efectiva y sólida. En este contexto, la propuesta de establecer consejos académicos en materia económica a nivel municipal, departamental y nacional emerge como una estrategia innovadora y esencial para abordar la mala administración económica y promover un desarrollo sostenible en todos los niveles de gobierno.

Los consejos académicos ciudadanos, como pieza clave de esta propuesta, representan un puente sólido entre el conocimiento teórico y la toma de decisiones prácticas en el ámbito económico. La composición de estos consejos será un reflejo de la riqueza y diversidad de la comunidad académica y profesional en el campo económico. Desde economistas destacados y expertos en finanzas hasta analistas de políticas públicas y especialistas en desarrollo económico, cada consejo estará integrado por individuos cuyos conocimientos y experiencias aporten a la elaboración de estrategias y soluciones concretas.

La formación de los consejos académicos ciudadanos seguirá una estructura escalonada que permita una representación efectiva a nivel municipal, departamental y nacional. En un primer nivel, los consejos municipales estarán compuestos por profesionales con conocimiento específico sobre las necesidades y particularidades económicas de cada localidad. Estos expertos locales tendrán la capacidad de identificar oportunidades de





desarrollo económico, así como desafíos y áreas críticas que requieran intervención.

A nivel departamental, los consejos se nutrirán de representantes provenientes de diferentes municipios y áreas económicas. Esta diversidad en la composición garantizará una visión más amplia y completa de las dinámicas económicas que operan en el ámbito departamental. La interconexión entre los consejos municipales y departamentales fomentará la colaboración y el intercambio de ideas, lo que resultará en estrategias más cohesionadas y eficientes.

Finalmente, a nivel nacional, el Consejo académico ciudadano de mayor alcance recogerá las voces y propuestas de todos los niveles inferiores. Este consejo nacional contará con representantes de los consejos departamentales y municipales, asegurando así la inclusión de múltiples perspectivas y enfoques en la toma de decisiones a nivel nacional. Las recomendaciones que emerjan de este consejo tendrán un alcance más amplio y podrán influir en políticas económicas de mayor envergadura.

La función principal de estos consejos académicos será proporcionar recomendaciones y propuestas basadas en las perspectivas académicas más vigentes a nivel mundial. Estos expertos en economía, finanzas y desarrollo económico estarán en contacto constante con los últimos avances en el campo, lo que permitirá abordar

los desafíos económicos con enfoques innovadores y respaldados por datos actualizados.

El propósito central de estos consejos será brindar asesoramiento técnico y respaldar la toma de decisiones informadas por parte de las autoridades gubernamentales. Las recomendaciones serán entregadas en forma de informes, análisis y propuestas concretas, lo que facilitará la implementación efectiva de estrategias económicas sólidas. Además, estas recomendaciones deberán ser consideradas mínimamente por las partes ejecutivas o legislativas responsables de administrar las propuestas. Esta colaboración entre el ámbito académico y el gubernamental tiene como objetivo optimizar la gestión económica y evitar errores pasados, estableciendo una sinergia beneficiosa que busca el bienestar y la prosperidad de la sociedad en su conjunto.

Es importante destacar que los consejos académicos no reemplazarán las instancias de toma de decisiones gubernamentales, sino que actuarán como un complemento esencial. La colaboración entre expertos académicos y los responsables de la administración económica permitirá un enriquecimiento mutuo, ya que las propuestas basadas en el conocimiento y la investigación estarán respaldadas por la experiencia y la comprensión práctica de los desafíos gubernamentales.

Para ilustrar la efectividad de los consejos académicos, podemos observar un ejemplo hipotético a nivel municipal.





Imaginemos una ciudad que enfrenta problemas económicos, como el desempleo y la disminución de la inversión local. El Consejo académico ciudadano municipal, integrado por economistas locales, analistas financieros y expertos en desarrollo económico, podría llevar a cabo un análisis exhaustivo de la situación. Basándose en datos reales y modelos económicos, el consejo podría proponer estrategias específicas para fomentar la creación de empleo y atraer inversiones.

Estas propuestas podrían incluir incentivos fiscales para las empresas locales, programas de capacitación para la fuerza laboral y estrategias de marketing para atraer inversores. Al presentar estas recomendaciones a las autoridades municipales, se establecería un diálogo constructivo entre la academia y el gobierno, donde las ideas respaldadas por datos y análisis sólidos serían consideradas para la implementación.

En conclusión, la creación de consejos académicos en materia económica a nivel municipal, departamental y nacional se presenta como una estrategia innovadora y esencial para abordar la mala administración económica y promover un desarrollo sostenible. Estos consejos, integrados por expertos en economía y desarrollo económico, brindarán asesoramiento basado en el conocimiento y la investigación más reciente. Su función será proporcionar recomendaciones concretas y respaldadas por datos para optimizar la gestión económica en todos los niveles de gobierno. Esta

colaboración entre la academia y el gobierno representa un paso importante hacia la construcción de una administración económica sólida, informada y orientada al bienestar de la sociedad en su conjunto.

Gobierno Digital para la Eficiencia y Transparencia:

Una de las soluciones más efectivas para mejorar la administración económica y prevenir la corrupción es la implementación del gobierno digital. Esta transformación busca reducir las interacciones presenciales y aumentar las transacciones electrónicas en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. El gobierno digital agiliza y simplifica los trámites, permitiendo que los ciudadanos realicen diversas gestiones de manera rápida y eficiente desde la comodidad de sus hogares.

La propuesta incluye la migración de todas las interacciones del Estado con los ciudadanos a plataformas digitales en un plazo de 90 días. Pagos de impuestos, reclamos, trámites de documentos, entre otros, serán llevados a un entorno digital que minimice la interacción humana y, por ende, los riesgos de corrupción. Este enfoque no solo mejora la practicidad para los ciudadanos, sino que también reduce las oportunidades de malversación de fondos y abusos por parte de funcionarios.

En un mundo en constante avance tecnológico y digitalización, la administración pública no puede quedar





rezagada. La implementación del gobierno digital se presenta como una estrategia esencial para mejorar la administración económica, optimizar la prestación de servicios y prevenir la corrupción. Este enfoque revolucionario busca transformar la manera en que el Estado interactúa con los ciudadanos, reduciendo las interacciones presenciales y aumentando las transacciones electrónicas en todos los niveles gubernamentales.

Un ejemplo destacado de gobierno digital se encuentra en Estonia, un país pequeño pero innovador en términos de tecnología y administración pública. Estonia ha implementado exitosamente su sistema de “e-Estonia”, donde prácticamente todos los servicios gubernamentales se ofrecen en línea. Desde la presentación de declaraciones de impuestos hasta el registro de nacimientos y matrimonios, los ciudadanos pueden acceder a estos servicios desde sus hogares mediante una identificación digital segura. Esto no solo ha mejorado la eficiencia en la prestación de servicios, sino que también ha reducido las oportunidades de corrupción al minimizar la interacción directa entre ciudadanos y funcionarios.

El gobierno digital no se trata solo de la conveniencia para los ciudadanos, sino que también tiene un impacto profundo en la prevención de la corrupción. Al reducir la cantidad de interacciones cara a cara entre ciudadanos y funcionarios, se minimizan los puntos de contacto donde

pueden surgir prácticas corruptas. La digitalización de trámites y procesos también proporciona un registro transparente y auditable de todas las transacciones, lo que dificulta la ocultación de actividades ilícitas.

Otro ejemplo inspirador es el de Singapur, conocido por su eficiente gobierno digital y sus sistemas de administración electrónica. El país ha implementado una plataforma llamada "SingPass", que es una identificación digital única que permite a los ciudadanos acceder a más de 1,000 servicios gubernamentales en línea. Desde la presentación de impuestos hasta la solicitud de subsidios, los ciudadanos pueden realizar todas estas gestiones desde la comodidad de sus hogares. Esto ha reducido drásticamente el tiempo y los costos asociados con los trámites gubernamentales, al tiempo que mejora la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

El gobierno digital no solo abarca la digitalización de servicios existentes, sino que también impulsa la creación de nuevos canales de comunicación entre el Estado y los ciudadanos. Plataformas como los portales de participación ciudadana permiten a los ciudadanos expresar sus opiniones, presentar propuestas y participar en la toma de decisiones. Finlandia, por ejemplo, ha desarrollado una plataforma llamada "Kansalaisaloite", que permite a los ciudadanos proponer nuevas leyes y regulaciones mediante la recolección de firmas en línea. Esta interacción directa con la sociedad no solo





fomenta la transparencia, sino que también empodera a los ciudadanos al brindarles la oportunidad de influir en la formulación de políticas.

El caso de India también es relevante en el ámbito del gobierno digital. El programa "Digital India" tiene como objetivo transformar el país en una sociedad conectada digitalmente, donde los servicios gubernamentales estén disponibles en línea y sean accesibles para todos los ciudadanos. El acceso a Internet y la tecnología móvil han sido fundamentales para llevar los servicios gubernamentales a regiones remotas y rurales, empoderando a los ciudadanos que anteriormente tenían un acceso limitado a la administración pública. Esto no solo mejora la inclusión, sino que también reduce la corrupción al minimizar la interacción directa entre ciudadanos y funcionarios.

La implementación exitosa del gobierno digital no está exenta de desafíos. La brecha digital y la falta de acceso a Internet pueden obstaculizar la adopción de estos servicios, especialmente en regiones rurales o marginadas. Por lo tanto, es crucial garantizar la accesibilidad y la inclusión en todos los niveles de la sociedad para garantizar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de la transformación digital.

En conclusión, el gobierno digital se presenta como una solución poderosa para mejorar la administración económica y prevenir la corrupción. La digitalización de

los servicios gubernamentales agiliza los trámites, reduce la interacción directa entre ciudadanos y funcionarios, y proporciona un registro transparente y auditable de las transacciones. Ejemplos como los de Estonia, Singapur, Finlandia e India demuestran que la implementación exitosa del gobierno digital puede mejorar la eficiencia administrativa, fomentar la participación ciudadana y reducir las oportunidades de prácticas corruptas. En un mundo cada vez más conectado, el gobierno digital representa un paso esencial hacia una administración pública más transparente, eficiente y centrada en el bienestar de los ciudadanos.

## Conclusión

En un panorama global caracterizado por la continua evolución económica y la creciente digitalización, la administración efectiva y transparente se erige como una necesidad ineludible. Los enfoques propuestos de "Consejos Académicos Ciudadanos" y "Gobierno Digital" ofrecen soluciones valiosas para afrontar estos desafíos con audacia y pragmatismo.

Los "Consejos Académicos Ciudadanos" constituyen un puente crucial entre la teoría y la práctica en la administración económica. A través de la colaboración entre expertos académicos y autoridades gubernamentales, se generan recomendaciones basadas en la investigación más reciente, lo que nutre la toma de decisiones con un enfoque informado y actualizado.





Estos consejos, presentes desde lo local hasta lo nacional, encarnan la síntesis de la experiencia práctica y el conocimiento teórico, promoviendo estrategias económicas coherentes y sostenibles que benefician a la sociedad en su conjunto.

Por otro lado, el "Gobierno Digital" emerge como un catalizador de la eficiencia y la transparencia en la administración pública. A través de la migración de procesos a plataformas digitales, se simplifican los trámites y se reducen las oportunidades de corrupción al minimizar las interacciones presenciales. Sin embargo, este enfoque no solo se traduce en conveniencia para los ciudadanos, sino que también aumenta la rendición de cuentas y empodera a la sociedad al involucrarla en la toma de decisiones. No obstante, para que esta transformación sea verdaderamente inclusiva, se debe abordar la brecha digital y garantizar que todos los segmentos de la sociedad accedan a los beneficios del "Gobierno Digital".

En conjunto, los "Consejos Académicos Ciudadanos" y el "Gobierno Digital" ejemplifican un futuro en el que la colaboración y la tecnología convergen para crear administraciones públicas más eficaces y transparentes. Estos enfoques no solo atienden los desafíos económicos y la prevención de la corrupción, sino que también impulsan la innovación y el progreso. Al integrar la experiencia de expertos con las ventajas de la digitalización, se está construyendo una base sólida

para la gestión económica y la gobernanza transparente en un mundo en constante cambio.

En última instancia, la intersección entre el conocimiento académico y la tecnología digital representa una oportunidad única para remodelar el paisaje de la administración económica y la gobernanza. Al adoptar estos enfoques, las naciones pueden construir sistemas más resilientes, inclusivos y responsables que aborden de manera efectiva los retos económicos y fortalezcan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. El camino hacia un futuro económico próspero y equitativo es guiado por la sinergia entre la experiencia académica y las posibilidades infinitas de la tecnología digital.

*Fotografía: Patricio Romay Rabaj*

CAPÍTULO CUATRO

# La reforma judicial en Bolivia: una necesidad urgente

## Introducción

La persecución judicial es una práctica que ha existido en Bolivia a lo largo de su historia. Durante la época colonial, los españoles persiguieron a los indígenas y criollos que se oponían a su dominio. En la época republicana, los gobiernos autoritarios persiguieron a los opositores políticos.

Esta persecución judicial ha tenido un impacto negativo en la sociedad boliviana. Ha generado desconfianza en el sistema judicial y ha limitado el ejercicio de los derechos humanos.

Durante la época colonial, los españoles utilizaron la persecución judicial como una herramienta para mantener su dominio sobre los indígenas y criollos. Los indígenas que se rebelaron contra la corona española fueron acusados de traición y sometidos a juicios sumarísimos. En muchos casos, fueron condenados a muerte o a trabajos forzados.

Los criollos que defendían los derechos de los indígenas también fueron perseguidos por los españoles. En 1780, el líder indígena Túpac Katari fue ejecutado por los españoles, que lo acusaron de traición.

La persecución judicial continuó durante la época republicana y en el Estado Plurinacional. Los gobiernos autoritarios utilizaron esta práctica para silenciar a sus opositores políticos, incluido el autoritarismo del siglo XXI en manos del Movimiento al Socialismo. Generacionalmente hemos vivido el impacto de la persecución, yo mismo soy nieto de 2 perseguidos políticos en los años 50s y 60s, yo mismo soy perseguido político en los años 20s del siglo XXI.

La persecución judicial ha tenido un impacto negativo en la sociedad boliviana. Ha generado desconfianza en el sistema judicial y ha limitado el ejercicio de los derechos humanos. Esta desconfianza en el sistema judicial ha dificultado que las personas accedan a la justicia. Las personas que han sido víctimas de delitos o violaciones





de derechos humanos tienen miedo de denunciar a los responsables, por temor a ser perseguidas judicialmente.

La limitación del ejercicio de los derechos humanos ha impedido que las personas ejerzan su libertad de expresión y su derecho a la participación política. Las personas que defienden los derechos humanos o que critican al gobierno tienen miedo de ser perseguidas judicialmente.

La persecución judicial es un problema grave que afecta a la sociedad boliviana. Es necesario tomar medidas para prevenir y sancionar esta práctica, las mismas que exploraremos en este capítulo.

La corrupción es un problema grave que afecta a todos los países, pero es especialmente grave en Bolivia. Según una encuesta realizada en 2023, el 85% de los bolivianos cree que el sistema judicial está corrupto.

Este alto nivel de percepción de corrupción se debe a una serie de factores, entre los que se encuentran:

La falta de transparencia en el funcionamiento del sistema judicial: El sistema judicial boliviano es opaco y difícil de entender para la población. Esto dificulta el control ciudadano sobre el funcionamiento del sistema y favorece la corrupción.

La falta de independencia judicial: Los jueces bolivianos no están libres de presiones políticas o económicas. Esto puede llevar a decisiones judiciales injustas o parciales.

La lentitud de los procesos judiciales: Los procesos judiciales bolivianos son largos y complejos. Esto puede favorecer la corrupción, ya que los involucrados en un proceso judicial pueden aprovecharse de la lentitud del sistema para sobornar a los jueces o a otros funcionarios.

La corrupción en el sistema judicial tiene un impacto negativo en la sociedad boliviana. Impide que las personas obtengan justicia y contribuye a la impunidad de los delitos. La corrupción en el sistema judicial dificulta que las personas obtengan justicia. Las personas que han sido víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos pueden tener miedo de denunciar a los responsables, por temor a ser víctimas de corrupción. Esto es especialmente grave para las personas que pertenecen a grupos vulnerables. Estas personas tienen menos acceso a los recursos legales y son más vulnerables a la corrupción.

La corrupción en el sistema judicial contribuye a la impunidad de los delitos. Los delincuentes pueden sobornar a los jueces o a otros funcionarios para evitar ser procesados o para obtener sentencias más leves. Esto genera un clima de inseguridad e impunidad en la sociedad. Las personas tienen menos confianza en el





sistema judicial y son más propensas a tomar la justicia por su mano.

La corrupción en el sistema judicial boliviano es un problema estructural que tiene su origen en una serie de factores, sin embargo existe unanimidad, incluso en las declaraciones del ex vicepresidente, Álvaro García Linera, quien indicó que lograron cambiar el color de piel dentro del sistema judicial, pero no lograron cambiar la forma en la cual se administra la justicia.

El sistema judicial boliviano enfrenta una serie de desafíos que limitan su capacidad para garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Además de la persecución judicial y la corrupción, que ya se han discutido, estos desafíos incluyen la falta de independencia judicial, la lentitud de los procesos judiciales y la falta de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la población.

La falta de independencia judicial es un problema fundamental que puede llevar a decisiones judiciales injustas o parciales. Los jueces bolivianos no siempre están libres de presiones políticas o económicas, lo que puede limitar su capacidad para actuar con imparcialidad.

La lentitud de los procesos judiciales es otro problema grave que dificulta que las personas obtengan justicia. En Bolivia, los procesos judiciales pueden durar años, lo que puede provocar que las víctimas de delitos o

violaciones de derechos humanos abandonen sus casos o que los delincuentes queden impunes.

La falta de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la población es un problema estructural que afecta a muchos países de América Latina. En Bolivia, este problema se agrava por la falta de recursos y la discriminación. Las personas que pertenecen a grupos vulnerables, tienen menos acceso a los recursos legales y son más propensas a sufrir discriminación en el sistema judicial

Los 4 pilares de la reforma judicial

Para lograr una reforma judicial efectiva, es necesario abordar los problemas que afectan al sistema judicial. Los cuatro pilares fundamentales de la reforma judicial son:

La transparencia en el sistema judicial es el primer pilar fundamental que sostiene la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Un sistema en el que las personas pueden entender cómo opera y cómo los jueces toman sus decisiones es esencial para garantizar la integridad y prevenir la corrupción en la judicatura.

Uno de los aspectos más cruciales de la transparencia en el sistema judicial es la revelación de los ingresos y los negocios de los magistrados y sus familias. Para lograr esto de manera efectiva, se debe implementar un sistema de presentación periódica de declaraciones juradas de





patrimonio, con periodos de reporte frecuentes, como mensuales o trimestrales. Además, se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva de los negocios de los magistrados y sus familiares, extendiéndose hasta el tercer grado de consanguinidad y afinidad.

Las declaraciones juradas de patrimonio son una herramienta fundamental para prevenir la corrupción en el sistema judicial. Estas declaraciones permiten al público en general acceder a información crucial sobre los intereses económicos de los magistrados. Al revelar sus activos y pasivos financieros, así como cualquier participación en negocios o inversiones, se brinda una visión clara de su situación económica. Esto es esencial para detectar posibles conflictos de intereses que puedan influir en la imparcialidad de sus decisiones judiciales.

La transparencia no solo implica que los magistrados revelen sus propios intereses financieros, sino que también se extiende a investigar los negocios de sus familiares. Esta medida tiene como objetivo evitar que los magistrados utilicen a sus parientes como intermediarios para ocultar su participación en actividades económicas cuestionables. La investigación de los negocios de los familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y afinidad es una salvaguardia esencial para garantizar que no haya conflicto de intereses encubierto.

Es importante destacar que la investigación de los negocios de los magistrados y sus familiares no debe limitarse únicamente a actividades legales, sino también a aquellas que puedan estar en el ámbito de la ilegalidad. Esto se debe a que la corrupción puede manifestarse de diversas formas, y los magistrados pueden involucrarse en actividades ilícitas para su beneficio personal o el de sus allegados. Por lo tanto, una investigación exhaustiva debe abarcar cualquier indicio de comportamiento inapropiado, sin importar su naturaleza.

La necesidad de transparencia judicial es evidente. Los ciudadanos deben tener la confianza de que los jueces no están influenciados por intereses personales o económicos al tomar sus decisiones. La corrupción en la judicatura socava la credibilidad del sistema de justicia y mina la confianza de la sociedad en su capacidad para resolver disputas de manera justa e imparcial.

En última instancia, la transparencia judicial no solo es una salvaguardia contra la corrupción, sino que también refuerza la legitimidad del sistema de justicia. Cuando los ciudadanos pueden ver que se están tomando medidas efectivas para garantizar que los magistrados no se beneficien de su posición, están más dispuestos a confiar en el sistema y a respetar las decisiones judiciales. La transparencia en el sistema judicial es, por lo tanto, un componente esencial para mantener





el estado de derecho y proteger los derechos y las garantías de todos los ciudadanos.

El segundo pilar consiste en un aumento en el presupuesto destinado a este poder del Estado puede tener un impacto significativo en su funcionamiento y, en última instancia, en la sociedad en su conjunto.

En primer lugar, es importante abordar la cuestión de la infraestructura judicial. Muchos sistemas judiciales en todo el mundo enfrentan desafíos relacionados con la falta de instalaciones adecuadas para llevar a cabo los procedimientos legales de manera eficiente. Juzgados abarrotados, instalaciones deterioradas y un acceso insuficiente a tecnología moderna pueden dificultar la capacidad del Poder Judicial para administrar la justicia de manera oportuna y efectiva.

Un aumento en el presupuesto destinado a la infraestructura judicial podría financiar la construcción y renovación de tribunales y edificios judiciales. Esto no solo proporcionaría un entorno más adecuado para los jueces, abogados y litigantes, sino que también permitiría una distribución más eficiente de los recursos judiciales, reduciendo los cuellos de botella y los retrasos en los procedimientos legales. La modernización de las instalaciones también podría incluir la implementación de sistemas de tecnología de la información para la gestión de casos, lo que agilizaría aún más el proceso judicial.

Además de la infraestructura, un mayor presupuesto podría destinarse a los salarios de los profesionales judiciales. El atractivo de la carrera judicial es fundamental para atraer y retener a los mejores talentos legales en el sistema de justicia. Ofrecer salarios competitivos para jueces, fiscales, defensores públicos y otros profesionales judiciales es esencial para garantizar que quienes ocupan estos cargos tengan la experiencia y la motivación necesarias para llevar a cabo sus funciones de manera efectiva.

Un salario competitivo puede atraer a abogados experimentados y calificados a la carrera judicial, en lugar de optar por el sector privado, donde a menudo se ofrecen salarios más altos. Esto significa que los tribunales contarán con jueces y fiscales con un profundo conocimiento del derecho y la capacidad de tomar decisiones basadas en la ley y la equidad. En última instancia, esto se traduce en una justicia de mayor calidad para los ciudadanos.

Un presupuesto ampliado para el Poder Judicial no solo beneficia a los profesionales judiciales, sino que también tiene un impacto directo en la sociedad en general. Una justicia eficiente y equitativa es fundamental para mantener el estado de derecho y garantizar que los ciudadanos tengan acceso a un proceso judicial justo y transparente.





En un sistema judicial fortalecido, los litigantes pueden esperar que sus casos se resuelvan de manera oportuna y justa. Los empresarios pueden confiar en la aplicación consistente de las leyes comerciales, lo que fomenta la inversión y el crecimiento económico. Los ciudadanos comunes pueden buscar reparación legal en casos de agravios, sabiendo que sus derechos serán protegidos por un sistema de justicia confiable.

Además, un Poder Judicial robusto también contribuye a la confianza en las instituciones gubernamentales en su conjunto. Cuando los ciudadanos perciben que el sistema de justicia es independiente, imparcial y eficiente, están más dispuestos a confiar en el gobierno y en la capacidad del sistema legal para abordar sus preocupaciones y resolver disputas.

En suma, asignar un presupuesto significativo al Poder Judicial es una inversión en la administración efectiva de la justicia y en la consolidación del estado de derecho. Este aumento de recursos puede utilizarse para mejorar la infraestructura judicial y garantizar salarios competitivos para los profesionales judiciales, lo que a su vez conduce a un sistema judicial más eficiente y equitativo. Los beneficios se extienden más allá de los tribunales, beneficiando a la sociedad en su conjunto al garantizar un acceso justo y oportuno a la justicia y fortalecer la confianza en las instituciones gubernamentales.

El consenso en la selección de las ternas de candidatos a jueces y fiscales es un objetivo crucial para fortalecer la independencia y la imparcialidad del sistema judicial. Se constituye en el tercer pilar. Para lograr este consenso, es fundamental involucrar a diversos sectores de la sociedad en el proceso de selección, lo que garantiza que las decisiones no estén dominadas por un solo grupo de interés y que reflejen una amplia gama de perspectivas y valores.

Uno de los elementos centrales de esta propuesta es abrir las puertas de la selección de candidatos a jueces y fiscales a la participación activa de la sociedad. Esto implica que no solo los poderes ejecutivo y legislativo tengan voz en la selección, sino también la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos departamentales, provinciales y municipales, así como otros actores relevantes. El objetivo es crear un proceso de selección inclusivo y transparente que refleje la diversidad de opiniones y garantice que se seleccionen candidatos altamente calificados y comprometidos con la justicia.

El primer paso hacia este consenso es la creación de un mecanismo de selección de candidatos que promueva la representatividad y la diversidad. Esto podría implicar la formación de comités de selección compuestos por miembros de diferentes sectores de la sociedad. Estos comités podrían incluir a representantes de organizaciones de derechos humanos, abogados,





académicos y ciudadanos comprometidos. La diversidad de opiniones y experiencias en estos comités es esencial para evitar la concentración de poder en unas pocas manos y garantizar que los candidatos seleccionados sean verdaderamente competentes e imparciales.

El proceso de selección debería basarse en criterios objetivos y transparentes. Los candidatos serían evaluados en función de su experiencia, conocimientos legales, ética profesional y compromiso con la justicia. Las evaluaciones serían públicas y se llevarían a cabo de manera abierta, permitiendo que los ciudadanos sigan de cerca el proceso y comprendan las razones detrás de cada selección. Esto fomentaría la confianza en el sistema y garantizaría que no haya favoritismos ni decisiones políticas detrás de las nominaciones.

Además, se debería establecer un sistema de revisión y control para garantizar la integridad del proceso de selección. Esto podría incluir la participación de observadores independientes y la posibilidad de impugnar las nominaciones si se descubre cualquier irregularidad. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que el proceso sea justo y equitativo.

El consenso en la selección de las ternas de candidatos a jueces y fiscales no solo fortalece la independencia del sistema judicial, sino que también promueve la confianza de la ciudadanía en la justicia. Cuando la

sociedad participa activamente en la elección de quienes administrarán la justicia, se siente más conectada con el sistema y tiene una mayor confianza en su capacidad para resolver disputas de manera imparcial y justa.

Este enfoque también ayuda a evitar la politización del sistema judicial, ya que reduce la influencia de los intereses políticos en la selección de jueces y fiscales. Cuando los candidatos son evaluados por su competencia y ética en lugar de su afiliación política, se fortalece la independencia del sistema y se garantiza que la justicia prevalezca sobre los intereses partidistas.

Buscar consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la selección de las ternas de candidatos a jueces y fiscales es esencial para fortalecer el sistema judicial boliviano. La participación de diferentes sectores de la sociedad en el proceso de selección, junto con criterios transparentes y evaluaciones objetivas, contribuirá a crear un sistema judicial independiente, imparcial y confiable que beneficie a todos los ciudadanos.

La descentralización de las designaciones judiciales a los niveles departamentales y provinciales representa el cuarto pilar de la reforma judicial. Esta propuesta se enmarca en un esfuerzo por equilibrar el poder judicial y acercarlo más a la población, lo que podría tener un





impacto profundo en la calidad de la administración de justicia en el país.

El sistema judicial en Bolivia ha enfrentado desafíos significativos en términos de corrupción, falta de transparencia y falta de confianza por parte de la ciudadanía. Para abordar estos problemas de manera efectiva, es fundamental que el proceso de selección de jueces y fiscales sea transparente, imparcial y representativo de la diversidad de opiniones y necesidades en todo el país. La descentralización de las designaciones judiciales busca lograr precisamente eso.

En la propuesta de descentralización, la selección de jueces y fiscales ya no sería un proceso centralizado en el ámbito nacional. En su lugar, se llevaría a cabo a nivel departamental y, en algunos casos, incluso a nivel provincial. Esto significa que cada región tendría un mayor control sobre la selección de sus propios representantes en el sistema judicial. Veamos cómo podría funcionar este enfoque y los beneficios que podría aportar.

En primer lugar, la descentralización permitiría una mayor representatividad en la selección de jueces y fiscales. Cada región tiene su propia idiosincrasia, necesidades y desafíos específicos. Al descentralizar las designaciones, se asegura que los profesionales del derecho que sean seleccionados tengan un conocimiento más profundo de la realidad local y estén mejor preparados

para abordar los problemas legales y sociales específicos de cada región. Esto también podría contribuir a reducir la percepción de que el sistema judicial está dominado por figuras nacionales o intereses políticos que no reflejan adecuadamente las preocupaciones locales.

En segundo lugar, la descentralización podría aumentar la confianza de la población en el sistema judicial. Actualmente, existe una considerable desconfianza hacia el proceso de selección de jueces y fiscales, con la percepción de que está plagado de favoritismos políticos y falta de transparencia. Al permitir que las regiones participen más activamente en la selección de sus representantes judiciales, se podría fortalecer la confianza en la imparcialidad y la objetividad del proceso. Los ciudadanos podrían sentir que tienen un mayor control sobre quiénes toman decisiones importantes en el ámbito judicial.

Además, la descentralización podría ayudar a evitar la politización de la justicia. Uno de los problemas recurrentes en Bolivia ha sido la influencia de factores políticos en la selección y el desempeño de los jueces y fiscales. Al llevar el proceso de selección a nivel departamental o, inclusive, provincial, se reduce la presión política sobre los candidatos y se fomenta la independencia judicial. Esto podría contribuir a la consolidación de un sistema judicial que actúa de manera imparcial y de acuerdo con la ley, en lugar de verse influenciado por consideraciones políticas o partidistas.





Otro beneficio de la descentralización es que podría aumentar la participación ciudadana en el proceso de selección de jueces y fiscales. La selección de candidatos podría involucrar a comités o paneles locales que incluyan a representantes de la sociedad civil, instituciones académicas y otros actores relevantes. Esto permitiría una mayor transparencia y participación en el proceso, lo que a su vez fortalecería la legitimidad de los seleccionados. Los ciudadanos podrían sentir que sus voces son escuchadas y que tienen la capacidad de influir en la elección de quienes administrarán la justicia en sus comunidades.

En términos de equidad y acceso a la justicia, la descentralización también podría ser beneficiosa. Las regiones rurales y remotas a menudo enfrentan desafíos únicos en términos de acceso a servicios legales y judiciales. Al descentralizar las designaciones, se podría tener en cuenta la necesidad de contar con jueces y fiscales que estén dispuestos y capacitados para trabajar en estas áreas, abordando así la brecha en el acceso a la justicia.

Por supuesto, la descentralización de las designaciones judiciales plantea desafíos y preguntas importantes que deben ser abordados cuidadosamente. Es fundamental establecer procesos transparentes y criterios claros para la selección de candidatos en el ámbito regional. También es importante garantizar que la descentralización no

conduzca a una fragmentación excesiva o a la creación de sistemas judiciales paralelos en cada región.

La descentralización de las designaciones judiciales a los niveles departamentales y, si el proceso lo permite, a los niveles provinciales es una propuesta que busca transformar la forma en que se seleccionan los jueces y fiscales en Bolivia. A través de una mayor representatividad, confianza ciudadana, independencia judicial y participación ciudadana, esta propuesta tiene el potencial de fortalecer significativamente el sistema de justicia del país. Sin embargo, su implementación requerirá un enfoque cuidadoso y la colaboración de diversas partes interesadas para asegurar que cumpla con sus objetivos y beneficie a toda la población boliviana.

Conclusión

La reforma judicial en Bolivia es una necesidad urgente que debe abordar una serie de problemas arraigados en la historia y el funcionamiento actual del sistema judicial. A lo largo de los años, la persecución judicial ha sido una práctica persistente en Bolivia, desde la época colonial hasta la actualidad. Esta persecución ha socavado la confianza en el sistema judicial y ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos de la población. Para abordar eficazmente estos desafíos, se propone una reforma integral en cuatro pilares clave: transparencia, aumento del presupuesto, consenso en





la selección de candidatos y descentralización de las designaciones judiciales.

La persecución judicial ha sido una constante en la historia de Bolivia, desde la época colonial hasta la actualidad. Durante la época colonial, los españoles utilizaron la persecución judicial para mantener su dominio sobre los indígenas y criollos que se oponían a su gobierno. Esta práctica continuó en la época republicana y durante el gobierno autoritario del Movimiento al Socialismo en el siglo XXI. Esta persecución ha creado una profunda desconfianza en el sistema judicial boliviano y ha limitado el ejercicio de los derechos humanos. La población teme denunciar delitos o abusos de derechos humanos por miedo a ser perseguida judicialmente.

Además de la persecución judicial, la corrupción en el sistema judicial es un problema grave que afecta a Bolivia. Según una encuesta, el 85% de los bolivianos cree que el sistema judicial está corrupto. Esto se debe a la falta de transparencia en el funcionamiento del sistema, la falta de independencia judicial y la lentitud de los procesos judiciales. La corrupción obstaculiza el acceso a la justicia y contribuye a la impunidad de los delitos, lo que socava aún más la confianza en el sistema.

La falta de independencia judicial es otro problema fundamental que afecta la imparcialidad de las decisiones judiciales. Los jueces a menudo enfrentan presiones políticas o económicas que pueden influir en sus

decisiones. Además, la lentitud de los procesos judiciales dificulta que las personas obtengan justicia de manera oportuna. Esto puede provocar que las víctimas de delitos o violaciones de derechos humanos abandonen sus casos o que los delincuentes queden impunes.

La falta de acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la población agrava aún más estos problemas. Las personas que pertenecen a grupos vulnerables tienen menos acceso a los recursos legales y son más propensas a sufrir discriminación en el sistema judicial. Esto perpetúa la desigualdad y la injusticia en la sociedad boliviana.

Para abordar estos problemas y lograr una reforma judicial efectiva, se proponen cuatro pilares fundamentales:

Transparencia en el sistema judicial: La transparencia es esencial para reconstruir la confianza en el sistema judicial. Esto incluye la revelación de los ingresos y los negocios de los magistrados y sus familias. Las declaraciones juradas de patrimonio deberían ser obligatorias y evaluadas públicamente. Esto ayudaría a detectar posibles conflictos de intereses y garantizar la integridad de los magistrados.

Aumento del presupuesto: Un presupuesto adecuado es esencial para mejorar la infraestructura judicial y garantizar salarios competitivos para los





profesionales judiciales. Una infraestructura moderna y tecnológicamente avanzada agilizaría los procedimientos judiciales, y salarios competitivos atraerían a abogados calificados a la carrera judicial. Esto mejoraría la calidad y la eficiencia de la justicia y, en última instancia, beneficiaría a la sociedad.

Consenso en la selección de candidatos: Para garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, es necesario involucrar a diversos sectores de la sociedad en el proceso de selección de jueces y fiscales. Esto incluye a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y otros actores relevantes. Un proceso de selección basado en criterios objetivos y transparentes, con la participación de múltiples partes interesadas, ayudaría a evitar la politización del sistema judicial y a garantizar que los candidatos sean altamente calificados y comprometidos con la justicia.

Descentralización de las designaciones judiciales: La descentralización permitiría una mayor representatividad en la selección de jueces y fiscales, acercándolos más a la población. Cada región tendría un mayor control sobre la selección de sus representantes judiciales, lo que reduciría la percepción de que el sistema judicial está dominado por figuras nacionales o intereses políticos. Además, aumentaría la participación ciudadana en el proceso de selección y abordaría la brecha en el acceso a la justicia en áreas rurales y remotas.

En conclusión, la reforma judicial en Bolivia es esencial para abordar problemas arraigados en el sistema judicial y reconstruir la confianza de la sociedad en la justicia. Los cuatro pilares de transparencia, aumento del presupuesto, consenso en la selección de candidatos y descentralización de las designaciones judiciales son fundamentales para lograr una reforma efectiva. Estos pilares pueden contribuir a un sistema judicial independiente, imparcial y confiable que beneficie a todos los ciudadanos y fortalezca el estado de derecho en Bolivia. Su implementación requerirá un enfoque cuidadoso y el compromiso de todas las partes interesadas para garantizar que se cumplan sus objetivos y se restaure la confianza en el sistema judicial boliviano.

*Fotografía: Patricio Romay Rabaj*

***PARTE 2***

***PROPUESTAS DE LARGO PLAZO***

***PARA LA BOLIVIA DEL 2050***

*Fotografía: Patricio Romay Rabaj*

CAPÍTULO UNO

# El Liberalismo Desarrollista

## Introducción

El liberalismo desarrollista es una propuesta que busca transformar el panorama político y económico de Bolivia con una visión a largo plazo, específicamente hacia el año 2050. Esta ideología presenta un enfoque único que combina la libertad individual con la dirección estratégica del Estado para lograr un desarrollo sostenible y competitivo a nivel global. A lo largo de este extenso análisis, exploraremos las características y aplicaciones de esta propuesta, utilizando ejemplos concretos y explicaciones detalladas.

El liberalismo desarrollista en Bolivia representa un giro revolucionario en la concepción tradicional

del papel del Estado y la economía en la sociedad. Esta ideología se basa en la creencia fundamental de que el individuo tiene la capacidad de tomar decisiones informadas dentro del marco legal y, al hacerlo, se fomenta la libertad y la autonomía. Este enfoque implica la eliminación de obstáculos superfluos que limitan la participación de los ciudadanos en la economía y restringen su capacidad para generar valor.

Bajo esta perspectiva, Bolivia se embarca en un viaje de transformación donde se reimagina el papel del Estado como facilitador de oportunidades y defensor de la igualdad de condiciones en lugar de un regulador pesado que sofoca la iniciativa individual. Para comprender completamente esta filosofía, es vital explorar dos pilares fundamentales del liberalismo desarrollista: la promoción de la competencia en el mercado interno y la orientación estratégica del Estado.

Promoción de la Competencia en el Mercado Interno

El liberalismo desarrollista, como hemos visto, considera la competencia como un motor esencial para el crecimiento económico y la innovación. La competencia sana y justa impulsa a las empresas a mejorar constantemente la calidad de sus productos y servicios, al mismo tiempo que mantiene los precios asequibles para los consumidores. Esta promoción de la competencia no solo beneficia a las empresas y a los consumidores, sino que también fomenta un ambiente





propicio para la innovación y el desarrollo económico sostenible.

Un ejemplo concreto de cómo se fomenta la competencia en el marco del liberalismo desarrollista se puede encontrar en las políticas de apertura de mercados. Históricamente, Bolivia había experimentado barreras comerciales y restricciones a la importación que limitaban la competencia en diversos sectores económicos. Esto a menudo resultaba en un mercado dominado por un número reducido de empresas, lo que tenía el potencial de conducir a la falta de incentivos para mejorar la calidad de los productos o reducir los precios. Sin embargo, con la adopción de políticas que eliminan estas barreras, se ha logrado fomentar la entrada de nuevos competidores en varios sectores.

Consideremos un ejemplo específico en el sector de las telecomunicaciones. En el pasado, este mercado solía estar dominado por una sola empresa, lo que se traducía en opciones limitadas para los consumidores y una falta de estímulo para la innovación. No obstante, con la apertura del mercado a nuevos competidores, emergieron empresas que ofrecían servicios más asequibles y de mayor calidad. Esto no solo benefició a los consumidores, que ahora tienen acceso a una variedad de opciones y servicios que antes eran inaccesibles, sino que también incentivó a las empresas existentes a mejorar sus ofertas para mantenerse competitivas.

Además de la apertura de mercados, el liberalismo desarrollista aboga por la eliminación de regulaciones excesivas que puedan obstaculizar la entrada de nuevos competidores. En muchos casos, las regulaciones gubernamentales pueden resultar en una carga onerosa para las pequeñas y medianas empresas, dificultando su capacidad para competir en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones. Una forma de abordar esto es mediante la simplificación de los procedimientos de registro y licencia para nuevos emprendedores. Al reducir la burocracia y los obstáculos administrativos, se facilita que los nuevos actores ingresen al mercado con mayor facilidad, lo que a su vez fomenta la competencia y estimula la innovación.

El liberalismo desarrollista en Bolivia reconoce la importancia de la competencia en la promoción del crecimiento económico, la mejora de la calidad de los productos y servicios, y la generación de beneficios para los consumidores. A través de políticas que fomentan la apertura de mercados y la eliminación de regulaciones innecesarias, se crea un entorno propicio para la competencia leal, lo que a su vez contribuye al desarrollo económico sostenible del país. Este enfoque no solo beneficia a las empresas y los consumidores, sino que también impulsa la innovación y la prosperidad a largo plazo.





## Orientación Estratégica del Estado

Si bien se enfatiza la importancia de la libertad individual y la competencia interna, el liberalismo desarrollista también reconoce que el Estado debe desempeñar un papel estratégico en la economía para competir en el ámbito internacional. Esto significa que el Estado no solo observa pasivamente el mercado, sino que también orienta y dirige recursos para lograr objetivos específicos.

Un ejemplo destacado de esta orientación estratégica se encuentra en la inversión en infraestructura. El Estado, siguiendo los principios del liberalismo desarrollista, puede identificar áreas clave, como por ejemplo la construcción de carreteras y vías de tren, que son fundamentales para el desarrollo económico del país. Al invertir en estas infraestructuras, el Estado no solo facilita la conectividad y el comercio, sino que también estimula la inversión privada y la generación de empleo.

Imaginemos una red de carreteras y vías de tren que conectan de manera eficiente las regiones productoras con los mercados nacionales e internacionales. Esta infraestructura mejora la movilidad de las mercancías y reduce los costos de transporte, lo que a su vez fomenta el crecimiento económico y la competitividad en el ámbito internacional. El Estado, en colaboración con el sector privado, trabaja en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura estratégica para garantizar

que el país esté preparado para competir en la economía global.

Este enfoque estratégico del Estado no se limita solo a la inversión en infraestructura de transporte, sino que también abarca otros sectores críticos para el desarrollo sostenible y la competitividad internacional. Por ejemplo, el Estado puede identificar la necesidad de invertir en tecnologías avanzadas, como la tecnología de la información y la comunicación (TIC), para mejorar la eficiencia de los procesos empresariales y promover la innovación. Esto implica el desarrollo de programas de capacitación y la promoción de la adopción de tecnologías digitales en las empresas.

Además de la infraestructura física y tecnológica, el Estado puede desempeñar un papel fundamental en la inversión en capital humano. Esto significa invertir en la educación y la formación de la fuerza laboral para que esté preparada para enfrentar los desafíos de la economía global. El Estado puede colaborar estrechamente con instituciones educativas y empresas para desarrollar programas de capacitación que estén alineados con las necesidades del mercado laboral y fomentar la adquisición de habilidades relevantes.

Otro aspecto importante de la orientación estratégica del Estado es la promoción de la investigación y el desarrollo (I+D). Esto implica invertir en la investigación científica y tecnológica para estimular la innovación y





la creación de nuevos productos y servicios. El Estado puede establecer incentivos fiscales y programas de financiamiento para fomentar la colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación en proyectos de I+D.

El papel estratégico del Estado en el marco del liberalismo desarrollista va más allá de ser un mero observador del mercado. El Estado se convierte en un socio activo en el desarrollo económico y la competitividad internacional al identificar áreas clave para la inversión, promover la innovación y mejorar la capacidad de la fuerza laboral. Al adoptar esta perspectiva, Bolivia puede estar mejor preparada para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en la economía global del siglo XXI.

Sostenibilidad Ambiental

El liberalismo desarrollista, como hemos destacado, no se limita exclusivamente a cuestiones económicas, sino que también integra la sostenibilidad ambiental como uno de sus pilares fundamentales. En este enfoque, se reconoce que cualquier forma de desarrollo económico debe ser compatible con la preservación del medio ambiente y la gestión responsable de los recursos naturales, asegurando así un futuro sostenible para las generaciones venideras.

Un ejemplo tangible de esta filosofía se puede encontrar en el sector de la energía. En lugar de depender únicamente de fuentes de energía no renovable, como los combustibles fósiles, el liberalismo desarrollista promueve la diversificación de la matriz energética. Esto se logra mediante la inversión en fuentes de energía renovable, como la energía solar y eólica, que no solo reducen la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también tienen un impacto positivo en el medio ambiente al disminuir las emisiones de carbono.

Imaginemos un país que ha realizado inversiones significativas en la energía solar y eólica a gran escala. Este país no solo reduce su huella de carbono, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático, sino que también crea empleos en la industria de las energías renovables, lo que beneficia a la economía local y nacional. Además, al reducir la dependencia de fuentes de energía costosas y agotables, el país se vuelve más autosuficiente y menos vulnerable a las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas.

El Estado desempeña un papel crucial en este escenario al trabajar en colaboración con empresas privadas y organizaciones ambientales. Juntos, diseñan políticas energéticas que no solo son sostenibles a largo plazo, sino que también fomentan la investigación y el desarrollo de tecnologías más limpias y eficientes. Esto puede incluir incentivos fiscales para la inversión en energías renovables, la promoción de la eficiencia





energética en todos los sectores y la implementación de regulaciones ambientales que limiten las emisiones contaminantes.

Además de la industria de la energía, el liberalismo desarrollista también se extiende a otros sectores, como la agricultura y la industria manufacturera. En la agricultura, se fomenta la adopción de prácticas sostenibles que conserven la calidad del suelo y el agua, promoviendo así la seguridad alimentaria a largo plazo. En la industria manufacturera, se promueve la adopción de tecnologías limpias y la reducción de desechos para minimizar el impacto ambiental.

El liberalismo desarrollista en Bolivia no solo busca el crecimiento económico y la competencia justa, sino que también abraza la sostenibilidad ambiental como un componente esencial de su visión. A través de la diversificación de la matriz energética y la promoción de prácticas sostenibles en varios sectores, el país busca lograr un equilibrio armonioso entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente, allanando el camino hacia un futuro más próspero y sostenible para todos.

Igualdad y Desarrollo Social

El liberalismo desarrollista, como hemos destacado, abarca no solo la promoción de la libertad individual y la competencia interna, sino que también se compromete

firmemente con la promoción de la igualdad entre todos los ciudadanos. A pesar del énfasis en la libertad individual, se reconoce que esta no debe traducirse en una mayor desigualdad económica o social en la sociedad. En cambio, el liberalismo desarrollista aboga por la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a los beneficios del desarrollo económico, asegurando así que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de alcanzar su máximo potencial.

Un ejemplo concreto de esta filosofía se manifiesta en las políticas de educación. El acceso a una educación de calidad es un pilar fundamental para garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de competir en un mundo cada vez más globalizado y dinámico. Bajo el enfoque del liberalismo desarrollista, el Estado trabaja incansablemente para mejorar la calidad de la educación, ampliar el acceso a programas educativos y garantizar que nadie quede rezagado debido a su origen socioeconómico.

Imaginemos un país en el que la educación de calidad está al alcance de todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de nacimiento o recursos económicos. En este país, los ciudadanos tienen acceso a programas educativos que fomentan la excelencia académica y la formación técnica, lo que les permite competir en el mercado laboral nacional e internacional. El Estado trabaja en estrecha colaboración con instituciones educativas y la sociedad civil para





garantizar que la educación no solo sea accesible, sino que también sea un motor de igualdad y desarrollo social.

Bajo esta visión, se implementan políticas educativas que buscan cerrar la brecha entre aquellos que tienen acceso a una educación de calidad y aquellos que no. Esto puede incluir la creación de programas de becas y subsidios para estudiantes de bajos ingresos, la inversión en infraestructura educativa en áreas marginadas y la promoción de enfoques pedagógicos innovadores que atiendan a las necesidades individuales de los estudiantes.

La igualdad de oportunidades también se refleja en el acceso a la atención médica y los servicios sociales. En un país comprometido con el liberalismo desarrollista, todos los ciudadanos tienen acceso a una atención médica asequible y de calidad, lo que garantiza que la salud no sea un privilegio reservado para unos pocos. Además, se promueven políticas que aborden las desigualdades socioeconómicas, como la falta de vivienda y la pobreza, para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de mejorar sus vidas.

El liberalismo desarrollista reconoce que la igualdad de oportunidades es esencial para el crecimiento y la cohesión social. Al brindar a todos los ciudadanos las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial, se fortalece la economía y se construye una sociedad más justa y equitativa. Bajo este enfoque,

el Estado desempeña un papel activo en la promoción de políticas que garanticen que nadie se quede atrás y que todos tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones en un mundo cada vez más desafiante y competitivo.

Modernización y Economía Circular

El liberalismo desarrollista va más allá de sus fundamentos económicos y se proyecta hacia la modernización en todas las áreas de la sociedad. Esta visión integral abarca desde la adopción de tecnologías avanzadas hasta la promoción activa de la economía circular. Lo notable de este enfoque es que no se limita a las áreas urbanas, sino que se extiende a las comunidades rurales, donde se buscan formas innovadoras de aprovechar los recursos disponibles y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

En las áreas urbanas, la modernización se manifiesta en la adopción de tecnologías de vanguardia en la administración pública. Un ejemplo concreto es la implementación de sistemas de gestión financiera en línea, que permiten un seguimiento en tiempo real del gasto público y una asignación eficiente de los recursos. Esta modernización no solo aumenta la transparencia en la gestión gubernamental, sino que también optimiza el uso de los recursos, garantizando que lleguen donde más se necesitan. Además, promueve la eficiencia y





la agilidad en la toma de decisiones, lo que beneficia directamente a los ciudadanos.

La modernización también se traduce en la promoción activa de la economía circular en las áreas urbanas. Este enfoque tiene como objetivo reducir el desperdicio y maximizar el uso de recursos a través del reciclaje y la reutilización. Imaginemos una ciudad donde se implementan políticas de reciclaje eficientes y se fomenta la reutilización de productos y materiales. Esto no solo reduce la cantidad de desechos enviados a vertederos, sino que también crea oportunidades económicas en la gestión de residuos y la producción de bienes reciclados.

En las comunidades rurales, la modernización se manifiesta de manera diferente pero igualmente impactante. Aquí, se busca la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y tecnologías que aumenten la productividad sin agotar los recursos naturales. Imaginemos una cooperativa agrícola en una zona rural que utiliza técnicas avanzadas de cultivo y riego. Estas prácticas permiten maximizar la producción de alimentos sin comprometer la salud del suelo o el suministro de agua. Además, la tecnología facilita la gestión de la producción y la comercialización de productos agrícolas, lo que aumenta los ingresos de los agricultores locales y contribuye a la seguridad alimentaria nacional.

La modernización en las áreas rurales también puede incluir la implementación de soluciones innovadoras para abordar los desafíos específicos de estas comunidades, como el acceso limitado a servicios de salud y educación. Por ejemplo, se podrían implementar clínicas móviles equipadas con tecnología de telemedicina para brindar atención médica a áreas remotas. Del mismo modo, la educación en línea y las aulas móviles podrían llevar la educación de calidad a comunidades rurales que anteriormente tenían un acceso limitado a escuelas y maestros calificados.

El liberalismo desarrollista impulsa la modernización en todas las áreas de la sociedad, desde la administración pública y la economía circular en las áreas urbanas hasta la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y soluciones innovadoras en las comunidades rurales. Este enfoque busca mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica, al tiempo que promueve el desarrollo sostenible y la eficiencia en el uso de los recursos.

Eficiencia y Transparencia en la Gestión Estatal

Para asegurar que el liberalismo desarrollista funcione como un mecanismo eficiente y efectivo en la dirección del Estado, se vuelve esencial que el gobierno sea capaz de gestionar sus recursos de manera transparente y eficaz. En este contexto, la implementación de herramientas de evaluación de desempeño regulares





y la realización de auditorías públicas se convierten en prácticas fundamentales para eliminar cualquier riesgo de malversación de fondos y garantizar la rendición de cuentas.

Un ejemplo destacado de la búsqueda de eficiencia en la administración pública se encuentra en la gestión financiera del Estado. La adopción de sistemas de gestión financiera en línea y de última generación no solo permite un seguimiento en tiempo real del gasto público, sino que también brinda la capacidad de identificar áreas donde se pueden implementar mejoras sustanciales. Estos sistemas proporcionan información detallada sobre cómo se gastan los fondos públicos, lo que permite una toma de decisiones más precisa y basada en datos.

La realización de auditorías públicas periódicas es otro pilar esencial de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos estatales. Estas auditorías son fundamentales para evaluar la eficiencia de los programas gubernamentales, identificar posibles problemas y garantizar que los fondos se utilicen de manera efectiva y en línea con los objetivos de desarrollo. Además, las auditorías públicas proporcionan una oportunidad para que los ciudadanos y las partes interesadas externas revisen y cuestionen las prácticas gubernamentales, lo que refuerza aún más la transparencia y la confianza en el gobierno.

Pensemos un Estado donde los ciudadanos pueden acceder fácilmente a información detallada sobre cómo se gastan sus impuestos y cómo se asignan los recursos en cada proyecto y programa. Esta transparencia en la gestión estatal no solo inspira confianza en los ciudadanos, sino que también promueve la participación activa de la sociedad en la supervisión de las actividades gubernamentales. Los ciudadanos pueden desempeñar un papel fundamental en la fiscalización del gobierno, lo que contribuye a un control más efectivo y a la eliminación de cualquier malversación de fondos.

Además, esta transparencia en la gestión financiera del Estado garantiza que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la sociedad en su conjunto. Los recursos se pueden asignar de manera estratégica para abordar problemas críticos, promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, los programas de educación, salud y desarrollo de infraestructura pueden beneficiarse de una asignación más precisa de recursos, lo que se traduce en mejores resultados para la sociedad en general.

La implementación de prácticas de gestión eficiente y transparente en el gobierno es fundamental para el éxito del liberalismo desarrollista. La utilización de sistemas de evaluación de desempeño, auditorías públicas y la promoción de la transparencia en la gestión financiera garantizan que los recursos públicos se





utilicen de manera responsable y en beneficio de la sociedad. Esto no solo inspira confianza en el gobierno, sino que también permite un desarrollo más efectivo y sostenible en el país.

## Conclusiones

El liberalismo desarrollista en Bolivia representa una propuesta de cambio profundo y revolucionario que busca redefinir las relaciones fundamentales entre el Estado, la economía y la sociedad en su conjunto. A través de una serie de principios y enfoques clave, esta ideología pretende sentar las bases para un futuro más próspero, equitativo y sostenible para el país. A medida que hemos explorado en detalle a lo largo de este hilo, el liberalismo desarrollista en Bolivia se basa en una serie de pilares esenciales que, cuando se implementan de manera efectiva, pueden llevar a resultados significativos y positivos para la nación.

Uno de los pilares fundamentales del liberalismo desarrollista es la promoción de la competencia interna. Se reconoce que la competencia sana y justa en el mercado interno es un motor crucial para el crecimiento económico y la innovación. En este sentido, las políticas que fomentan la apertura de mercados y la eliminación de regulaciones excesivas han sido fundamentales. Estas políticas han permitido la entrada de nuevos competidores en diversos sectores, lo que a su vez ha conducido a una mayor calidad de productos y

servicios, así como a precios más asequibles para los consumidores. Un ejemplo claro de esta promoción de la competencia se puede ver en la apertura del mercado de telecomunicaciones, que anteriormente estaba dominado por un solo jugador. Esta apertura ha llevado a la diversificación de opciones y servicios para los consumidores, lo que demuestra cómo la competencia puede ser un impulsor significativo de la mejora y la innovación en la economía.

Otro aspecto fundamental del liberalismo desarrollista es la orientación estratégica del Estado en la economía. Si bien se enfatiza la importancia de la libertad individual y la competencia interna, se reconoce que el Estado tiene un papel esencial en la promoción del desarrollo económico. Esto se ve claramente en la inversión en infraestructura crítica, como carreteras y vías de tren. Estas inversiones no solo mejoran la conectividad y facilitan el comercio, sino que también estimulan la inversión privada y la generación de empleo. Imaginemos un país con una red eficiente de carreteras y ferrocarriles que conectan regiones productoras con mercados nacionales e internacionales. Esta infraestructura no solo impulsa la economía local, sino que también mejora la competitividad a nivel global.

La sostenibilidad ambiental es otro pilar clave del liberalismo desarrollista en Bolivia. Se reconoce la importancia de gestionar los recursos naturales de manera responsable y de diversificar la matriz energética





hacia fuentes renovables. La inversión en energía solar y eólica, por ejemplo, no solo reduce la dependencia de los combustibles fósiles, sino que también reduce las emisiones de carbono. Imaginemos un país que ha invertido en energía solar y eólica a gran escala. Esto no solo reduce la huella de carbono del país, sino que también crea empleos en la industria de las energías renovables y reduce la dependencia de fuentes de energía costosas y agotables. Este enfoque demuestra cómo el desarrollo económico puede ser compatible con la preservación del medio ambiente.

La igualdad y el desarrollo social son principios intrínsecos del liberalismo desarrollista en Bolivia. A pesar de enfocarse en la libertad individual, se reconoce que esto no debe traducirse en una mayor desigualdad económica o social. La educación es un ejemplo clave en este sentido. El acceso a una educación de calidad es fundamental para garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de competir en un mundo cada vez más globalizado. Bajo el enfoque del liberalismo desarrollista, el Estado trabaja para mejorar la calidad de la educación y ampliar el acceso a programas educativos. Imaginemos un país donde la educación de calidad está al alcance de todos, independientemente de su lugar de nacimiento o recursos económicos. Esto no solo beneficia a los individuos, sino que también contribuye al desarrollo económico y social del país en su conjunto.

La modernización es otro elemento central del liberalismo desarrollista. Esto incluye la adopción de tecnologías avanzadas y la promoción de la economía circular. En las áreas urbanas, la modernización se refleja en la adopción de tecnología de última generación en la administración pública. Esto incluye sistemas de gestión financiera en línea que permiten un seguimiento en tiempo real del gasto público y la asignación eficiente de recursos. Además, la modernización se extiende a las comunidades rurales, donde se buscan formas innovadoras de aprovechar los recursos disponibles. Imaginemos una cooperativa agrícola que utiliza técnicas avanzadas de cultivo y riego para maximizar la producción de alimentos sin agotar los recursos naturales. Este enfoque demuestra cómo la modernización puede impulsar la productividad y el desarrollo en todas las áreas del país.

Por último, pero no menos importante, la eficiencia en la gestión estatal es esencial para el éxito del liberalismo desarrollista. La implementación de métricas de evaluación de desempeño regulares y auditorías públicas garantiza que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la sociedad. Imaginemos un Estado donde los ciudadanos pueden acceder fácilmente a información detallada sobre cómo se gastan sus impuestos y cómo se asignan los recursos en cada proyecto y programa. Esta transparencia en la gestión estatal no solo inspira confianza en el gobierno, sino que también promueve la participación activa





de la sociedad en la supervisión de las actividades gubernamentales.

El liberalismo desarrollista en Bolivia es una propuesta que abarca una serie de pilares esenciales para el desarrollo sostenible y equitativo del país. A través de la promoción de la competencia, la orientación estratégica del Estado, la sostenibilidad ambiental, la igualdad y el desarrollo social, la modernización y la eficiencia en la gestión estatal, esta ideología ofrece un camino hacia un futuro donde todos los ciudadanos tengan la oportunidad de prosperar y contribuir al crecimiento y desarrollo de la nación boliviana. Con esta filosofía como guía, Bolivia puede aspirar a un futuro brillante donde los principios de libertad, igualdad y sostenibilidad se combinen para beneficio de todos.

*Fotografía: Patricio Romay Rabaj*





CAPÍTULO DOS

# La Búsqueda de la Autodeterminación de la Nación Cruceña

## Introducción

El texto plantea un sueño compartido de un futuro más prometedor en la región de Santa Cruz, Bolivia. El preámbulo resalta la expectativa de días mejores y la creencia en un mañana lleno de oportunidades y esperanza, presentando este anhelo como un compromiso no egoísta con las generaciones venideras. Se aborda la falta de equidad y oportunidades, describiéndola como un "robo" que debe ser enfrentado. La propuesta central gira en

torno a la autodeterminación y progreso como medio para alcanzar justicia y equidad en la región.

El punto 1 realiza un análisis crítico de la Constitución actual, argumentando que no refleja adecuadamente la identidad de Santa Cruz. Se cuestiona la noción de que la formación de naciones se detuvo en 1492, destacando la evolución continua de las identidades a lo largo del tiempo. El punto 2 explora la oportunidad de reconocer identidades y buscar equidad dentro del marco constitucional, haciendo hincapié en la falta de reconocimiento de la nación boliviana en sí misma. Se propone utilizar la apertura de la Constitución para construir un país más inclusivo y cohesionado.

El punto 3 describe la sociedad cruceña, sus valores y su relación con la tierra, enfatizando la propuesta de autodeterminación para lograr una representación ampliada en las decisiones. Finalmente, el punto 4 presenta la idea de refundar Bolivia mediante autodeterminación y una asamblea constituyente. Se propone activar la iniciativa popular para convocar esta asamblea, argumentando que la mayoría de los bolivianos están a favor de esta refundación. La propuesta se enmarca en la democracia participativa y busca un país más justo y unido, resaltando la importancia de reconocer identidades y aspiraciones.





## Un Sueño Compartido de Mejores Días

En el corazón mismo de nuestra tierra de Santa Cruz, se alza un desafío que nos impulsa a soñar y a anticipar un futuro más radiante. El preámbulo de este documento no solo marca el inicio de nuestras palabras, sino que también encarna la esencia de una expectativa colectiva: la búsqueda incansable de días mejores para nuestro hogar. Un sueño que surge desde lo más profundo de nuestras almas, motivado por la firme creencia de que merecemos un mañana más prometedor, lleno de oportunidades y esperanza.

En su esencia más pura, este preámbulo se erige como el eco de una voz colectiva que clama por un destino enriquecedor. No es una simple aspiración, sino una convicción arraigada en la noción fundamental de que merecemos lo mejor para nosotros y para las generaciones venideras. Es un llamado a la acción, un recordatorio persistente de que nuestros sueños merecen ser alcanzados y materializados en un horizonte de progreso y bienestar.

El anhelo de días mejores no es una demanda egoísta, sino una afirmación de amor y dedicación hacia nuestras familias y descendientes. Al levantar la voz y decir “me merezco buscar mejores días”, establecemos un pacto implícito con el futuro. Porque en el acto de buscar un mañana más brillante, estamos construyendo las bases para que nuestros hijos, nietos y las generaciones por

venir puedan disfrutar de las recompensas de nuestro esfuerzo y visión.

Sin embargo, este sueño no se teje en aislamiento. En el seno de nuestras aspiraciones yacen cuestionamientos profundos sobre nuestra posición en el conjunto de la sociedad. Nos damos cuenta de que no somos tratados con la equidad que merecemos. Es una realidad dura y en ocasiones injusta, donde la distribución equitativa de recursos y oportunidades parece ser una quimera. Esta falta de equidad, esta negación de lo que nos corresponde, es un acto que debe ser llamado por su nombre: un robo. Aunque el término puede resultar contundente, refleja con precisión el despojo de las oportunidades que nos pertenecen como ciudadanos comprometidos con el bienestar colectivo.

En este entorno de desigualdad y robo disfrazado, emerge la certeza de que merecemos más. Merecemos una voz que sea escuchada con la misma claridad y atención que otras. Merecemos un lugar en la mesa de decisiones, donde las oportunidades fluyan de manera equitativa para todos, sin importar su origen ni su historia. Esta búsqueda de justicia y equidad es la que impulsa nuestra madurez como sociedad. A pesar de los obstáculos y desafíos, nos enfrentamos a esta realidad con determinación, sabiendo que podemos y debemos actuar de manera diferente.





Así pues, en medio de los desafíos y las desigualdades, surge nuestra propuesta: una propuesta nacida de la aspiración compartida de autodeterminación y progreso. Un camino que reconoce la valía de nuestra identidad cruceña y busca forjar un futuro donde tengamos el poder de tomar decisiones que definan nuestra dirección. Este preámbulo, que es el prólogo de una narrativa de cambio y esperanza, invita a todos los ciudadanos a unirse en este viaje de transformación.

En resumen, este preámbulo encapsula el espíritu de un sueño colectivo de mejores días. Un sueño que se funda en la convicción de que merecemos un futuro más prometedor, un futuro que alcance más allá de nuestras vidas y se extienda hacia las generaciones por venir. Es un sueño que se yergue en contra de la desigualdad y el robo de oportunidades, en busca de un mañana en el que podamos actuar de manera distinta. Es un sueño que nos convoca a una propuesta concreta de autodeterminación y empoderamiento. Un sueño que, juntos, transformaremos en realidad.

## El Error - Un Análisis de la Constitución Vigente

Dentro del marco de nuestra historia y nuestro devenir como territorio y sociedad, se alza una pieza fundamental que trasciende en la configuración de nuestra identidad: la Constitución Política vigente. Este capítulo se sumerge en un análisis crítico de dicha constitución, que aunque referendada a nivel nacional,

debe ser evaluada considerando el contexto particular de Santa Cruz. En este panorama, la constitución aparece como un documento impuesto por una arrolladora mayoría en la Asamblea Constituyente, una mayoría que no reflejaba necesariamente la voluntad y la identidad de nuestra región.

El proceso mismo de la aprobación de esta constitución se presenta como un caso de imposición y desbalance. Enarbolando la bandera de la democracia, se llevaron a cabo consultas y referéndums que respaldaron la validez del documento. Sin embargo, el matiz crucial radica en que la realidad política y social de Santa Cruz se vio reflejada de manera distorsionada en este proceso. Una abrumadora mayoría a nivel nacional no necesariamente representaba el sentir y los valores de nuestra región, una tierra que tiene sus propias aspiraciones y visiones.

La constitución, en su forma actual, establece la noción de Bolivia como un estado plurinacional, un concepto que reconoce la coexistencia de diversas naciones en su interior. Este aspecto podría ser una base para la convivencia y el reconocimiento mutuo de diferentes identidades y culturas. No obstante, es necesario cuestionar la naturaleza de esta plurinacionalidad y su relación con el proceso de formación de naciones.

Aquí radica el meollo del problema: la concepción de que el proceso de conformación de naciones se detuvo en el año 1492, el fatídico 12 de octubre cuando Colón





desembarcó en estas tierras. Esta afirmación, aunque arraigada en la historia oficial, se convierte en un error conceptual que socava la comprensión misma de lo que constituye una nación. La llegada de Colón marcó el inicio de una nueva era, pero no detuvo el proceso de construcción y evolución de las naciones.

El acto de conformar una nación va más allá de un momento estático en la historia. La nación es una entidad viva y en constante evolución, moldeada por las interacciones y las conexiones entre su gente. No se trata simplemente de un grupo de individuos, sino de un colectivo que comparte una historia, una cultura y una visión de futuro. Las naciones se construyen con el tiempo y a través de la voluntad de su gente, no se detienen ante la llegada de un navegante.

La concepción de que el proceso de formación de naciones se detuvo en 1492 desconoce el tejido complejo de nuestra historia y nuestra cultura. La diversidad cultural y étnica que caracteriza a América Latina y, por extensión, a Bolivia, se ha construido a lo largo de siglos. La riqueza de nuestras tradiciones, lenguajes y valores no puede ser encasillada en el momento de la llegada de Colón. Somos más que un punto de inicio; somos un continuo proceso de intercambio y mestizaje que ha forjado identidades únicas y vibrantes.

La plurinacionalidad, como concepto arraigado en la Constitución, se alza como un pilar que busca reconocer

la coexistencia de múltiples identidades y culturas en el seno de la nación boliviana. Sin embargo, su mera inclusión en el texto constitucional no debe ser percibida como un acto de mera aceptación retórica, sino como una invitación a profundizar en la comprensión y la valoración de la diversidad que caracteriza a nuestro territorio.

Esta noción de plurinacionalidad trasciende la mera conceptualización teórica; su poder radica en la capacidad de actuar como un catalizador para la construcción de un país más inclusivo y unido. Si bien es cierto que se ha dado un paso importante al reconocer que Bolivia es un estado plurinacional, es fundamental que esta afirmación no se convierta en una mera etiqueta, sino que se traduzca en políticas y prácticas concretas que reflejen la verdadera riqueza de identidades y culturas presentes en nuestro territorio.

Dentro del tejido de esta plurinacionalidad, se vislumbra la oportunidad de fomentar un diálogo intercultural genuino, donde las distintas voces tengan la oportunidad de expresarse y ser escuchadas. Más allá de la mera tolerancia, se trata de celebrar la riqueza de nuestras diferencias y abrazar la idea de que la coexistencia de diversas identidades enriquece nuestra sociedad y nos enriquece como individuos. La plurinacionalidad, entonces, debería ser el cimiento sobre el cual construimos puentes de entendimiento y cooperación.





No obstante, es importante reconocer que la plurinacionalidad también enfrenta desafíos significativos. La diversidad cultural y étnica que caracteriza a Bolivia a menudo se ve acompañada por tensiones y conflictos, derivados en parte de malentendidos y prejuicios arraigados. En este sentido, la plurinacionalidad se presenta como una oportunidad para abordar estas tensiones de manera constructiva, fomentando la educación intercultural y la promoción de valores de respeto y convivencia pacífica.

Para que la plurinacionalidad sea efectiva, es esencial que se traduzca en acciones concretas y en políticas inclusivas. Esto implica, por ejemplo, asegurarse de que las minorías étnicas y culturales tengan acceso a la educación, la salud y las oportunidades económicas en igualdad de condiciones. También significa promover la participación activa de estas comunidades en la toma de decisiones que afecten sus vidas y entornos.

En este contexto, la propuesta de autodeterminación y progreso presentada en el texto cobra relevancia. Busca reconocer y respetar la diversidad de identidades y aspiraciones, brindando a las regiones la capacidad de tomar decisiones que afecten sus destinos de manera más directa. La plurinacionalidad se convierte así en un vehículo para garantizar que estas decisiones sean tomadas desde la autenticidad y la representación adecuada de las distintas identidades que conforman la nación boliviana.

En conclusión, la plurinacionalidad es un concepto poderoso que debe ser más que una mera afirmación en la Constitución. Debe ser una fuerza transformadora que nos invite a explorar la riqueza de identidades y culturas que coexisten en nuestro territorio. Implica un llamado a la acción para construir un país más inclusivo y unido, donde la diversidad sea celebrada y donde las políticas y prácticas reflejen verdaderamente esta plurinacionalidad. La propuesta de autodeterminación y progreso presentada en el texto se alinea con estos ideales al buscar reconocer y respetar las aspiraciones únicas de las regiones dentro del marco de una Bolivia plurinacional.

En resumen, este acápite abre la discusión sobre la constitución y la plurinacionalidad, y cuestiona el error fundamental en la concepción de las naciones. La llegada de Colón no detuvo el proceso de formación de identidades colectivas; más bien, marcó el inicio de un viaje de intercambio cultural y construcción constante. Reconocer esta dinámica es esencial para una comprensión auténtica de nuestra identidad como región y como parte del Estado boliviano

La Oportunidad: Reconociendo Identidades y Buscando la Equidad

En este capítulo, exploramos la oportunidad que se presenta ante nosotros, una oportunidad que surge de las características democráticas y plurales





de la Constitución vigente. Enfocándonos en este elemento valioso, destacamos cómo la Constitución ofrece alternativas para que la población se exprese y busque soluciones a sus problemas. La oportunidad que se desprende de esta estructura democrática es un pilar sobre el cual podemos construir un futuro más inclusivo y equitativo.

Una de las características destacables de la Constitución actual es su reconocimiento de la existencia de múltiples naciones dentro del territorio del Estado boliviano. Este reconocimiento, aunque encomiable, no está exento de desafíos y contradicciones. Si bien acepta la presencia de diversas identidades nacionales, parece no abordar de manera adecuada la noción de una "nación boliviana". Esta omisión es desconcertante y lleva a cuestionamientos sobre la comprensión misma de lo que significa ser parte de la nación boliviana.

El 6 de agosto de 1825, un hito en nuestra historia, marcó la fundación de Bolivia como Estado republicano. Sin embargo, la Constitución actual señala que se ha dejado atrás este Estado y que es el único que ha existido detrás de la nación boliviana. Esta afirmación pone en tela de juicio la identidad misma de Bolivia y cómo se concibe dentro de la diversidad de identidades nacionales que coexisten en nuestro país. Es una paradoja que, al reconocer la pluralidad, parece negar la unidad y la cohesión de la nación boliviana.

A pesar de estas contradicciones, la Constitución actual presenta una oportunidad invaluable. La madurez que hemos alcanzado como sociedad nos brinda la capacidad de aprovechar esta apertura para construir puentes entre diferentes grupos y aspiraciones. La existencia de identidades nacionales, tanto las naciones indígenas originario campesinas como nuestra propia nación cruceña, debe ser reconocida y valorada por igual.

Aquí es donde reside la esencia de la oportunidad que se presenta ante nosotros. Si tenemos la voluntad de reconocer y respetar la diversidad de identidades, podemos trabajar juntos para construir un país más equitativo y unido. No se trata de negar la presencia de las naciones indígenas originario campesinas ni de minimizar su importancia. Al contrario, es un llamado a la inclusión de todas las voces y a la valoración de todas las identidades que conforman nuestra nación boliviana.

La idea fundamental de crear un espacio donde grupos más amplios, incluyendo la identidad de nuestra nación cruceña, puedan ejercer su capacidad y derecho para influir en las decisiones que moldean sus destinos, resuena como una oportunidad trascendental en el panorama de Bolivia. La aspiración de autodeterminación, en este sentido, se revela como un principio universal que no debería circunscribirse exclusivamente a las naciones indígenas originario campesinas, sino que debería extenderse a todos los grupos que conforman la rica paleta de identidades y visiones de nuestra nación.





Es imperativo reconocer que la autodeterminación no se reduce a una simple cuestión política, sino que se entrelaza con las aspiraciones humanas fundamentales de libertad, dignidad y participación. En un contexto como el nuestro, caracterizado por una diversidad de voces y perspectivas, la autodeterminación surge como una vía para asegurar que las decisiones que afectan a cada grupo sean tomadas desde su contexto y realidad únicos. Esta noción trasciende las fronteras de etnicidad, cultura y geografía, ya que cada grupo, con sus particularidades y visiones, merece tener un papel activo en la creación y desarrollo del futuro colectivo de Bolivia.

La autodeterminación, tal como se plantea en el texto, no aboga por la fragmentación o división de la nación, sino por la construcción de una unidad en la diversidad. Reconoce la importancia de respetar y nutrir las diferencias que nos definen, mientras se promueve una cohesión basada en el reconocimiento mutuo y la búsqueda de objetivos comunes. En este sentido, la autodeterminación se vuelve un catalizador para fortalecer el tejido social, al dar voz y empoderamiento a grupos que a menudo se han sentido marginados o ignorados en el proceso de toma de decisiones.

En última instancia, la oportunidad que se nos presenta es una llamada a la equidad y la inclusión. A través de un diálogo honesto y respetuoso, podemos trabajar juntos para reconocer y valorar todas las identidades

que coexisten en nuestro país. La construcción de un futuro mejor no debe estar basada en la exclusión o la imposición, sino en la comprensión mutua y la búsqueda de soluciones conjuntas. Es en este espíritu de unidad en la diversidad donde encontramos la verdadera oportunidad de fortalecer nuestra nación boliviana.

Forjando una Sociedad Inclusiva y Sostenible a través del Cruceñismo

En el tercer capítulo de esta propuesta, se aborda con profundidad la configuración única de la sociedad cruceña, caracterizada por su profundo compromiso con la inclusión, sus sólidos valores libertarios, su enfoque en el libre mercado, su impulso constante hacia el crecimiento y desarrollo, y su decidida responsabilidad en la conservación del medio ambiente. Este capítulo, en perfecta sintonía con los principios fundamentales de autodeterminación que proponemos, resalta los pilares que definen la entidad cruceña y establecen las bases para una nueva etapa en la relación con el Estado boliviano.

La sociedad cruceña se distingue por su naturaleza inclusiva y diversa, donde convergen una multitud de tradiciones, culturas y perspectivas. La inclusión se erige como un pilar central, garantizando la participación activa de todos los sectores, sin importar su origen, género o posición social, en la construcción colectiva de una realidad justa y equitativa. Además, los valores





libertarios son una columna vertebral, promoviendo la autonomía individual y colectiva, y destacando la importancia de preservar los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

El cruceñismo está profundamente arraigado en la filosofía del libre mercado, la cual promueve la competencia, la innovación y el progreso económico. Se reconoce que un entorno de libre mercado crea oportunidades para la iniciativa privada y el emprendimiento, impulsando así el crecimiento sostenible y la generación de empleo. Al mismo tiempo, se valora encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, ya que la sostenibilidad es una responsabilidad asumida en nombre de las generaciones presentes y futuras.

Un aspecto fundamental que se aborda en este capítulo es la oportunidad que brinda la actual Constitución. Se aprecia la existencia de múltiples naciones dentro del territorio del Estado boliviano, lo cual refleja la diversidad y riqueza cultural de la nación. Sin embargo, se identifica una brecha en el reconocimiento de la nación boliviana en la Constitución, una omisión que se considera esencial para consolidar la unidad en medio de la diversidad.

Resulta innegable que la autodeterminación no es una prerrogativa exclusiva de las naciones indígenas originarias campesinas. Los cruceños también poseen aspiraciones y deseos legítimos que merecen ser tenidos

en cuenta en la construcción del futuro de Bolivia. En esta perspectiva, se busca que la nación cruceña sea reconocida y aceptada como una identidad en el esquema jurídico que plantea el Estado Plurinacional.

La base de esta propuesta se cimienta en la historia y el desarrollo evolutivo que ha caracterizado a la sociedad cruceña a lo largo del tiempo. Observar que siete de cada diez cruceños tienen sus raíces más allá de las fronteras del departamento de Santa Cruz no solamente resalta la sorprendente capacidad de inclusión que caracteriza a esta región, sino también pone de manifiesto su habilidad innata para absorber y asimilar una variada gama de influencias culturales. En este contexto, la nación cruceña se erige como una entidad en continua metamorfosis, enriquecida por las aportaciones individuales de aquellos que optan por formar parte de esta comunidad y contribuir a su constante progreso. No solamente es de gran relevancia el hecho de que siete de cada diez cruceños mantengan lazos con al menos un antepasado que cruzó las fronteras en las dos generaciones previas, sino que también resulta esencial comprender cómo esta cifra ha evolucionado: de cinco de cada diez cruceños nacidos en las décadas del 40 y 50 a nueve de cada diez cruceños entre los nacidos a partir de la década de los 90.

Además, a fin de desterrar de manera definitiva las alegaciones que tildan a Santa Cruz como una tierra de extranjeros, se torna profundamente esclarecedor





poner de manifiesto que un 85% de los cruceños cuentan con una genealogía que abarca dos generaciones enteramente conformadas por individuos nacidos en suelo boliviano. Tan solo un 15% de la población presenta al menos un linaje originado en el extranjero. Este hecho, aunque se ha mantenido en la sombra, revela la fuerte conexión y arraigo que los cruceños sienten hacia su país y su territorio. Los datos evidencian que la percepción de Santa Cruz como un lugar con predominancia de influencias extranjeras es una simplificación injusta que no refleja la rica y compleja historia de la región. Por el contrario, la realidad demuestra que la sociedad cruceña ha sabido forjar una identidad única y profunda, moldeada por una multiplicidad de influencias que convergen en una mezcla única y vibrante.

Este análisis histórico y demográfico subraya la dinámica naturaleza de la sociedad cruceña. Más que limitarse a una identidad estática, esta sociedad se ha nutrido de las contribuciones de individuos de diversas procedencias, quienes han decidido sumarse al tejido social cruceño y aportar a su desarrollo. Esta capacidad de absorción y adaptación, reflejada en el aumento constante de la presencia de individuos con raíces en Bolivia en las genealogías, subraya la habilidad de la sociedad cruceña para evolucionar sin perder su esencia. Es una manifestación tangible de cómo la historia ha forjado un espacio donde las diferencias convergen y se fusionan para crear algo nuevo y auténtico.

Esta realidad desafía cualquier percepción superficial de Santa Cruz como una región homogénea o aislada. En cambio, se presenta como un crisol de identidades y culturas que coexisten en una sinfonía armoniosa. La nación cruceña, entonces, emerge como un ejemplo de unidad en la diversidad, donde las distintas contribuciones se entrelazan para dar forma a una identidad compartida que abraza su rica historia y se proyecta hacia un futuro inclusivo y esperanzador.

La propuesta de otorgar autonomía y autodeterminación a la sociedad cruceña se apoya en la intrincada y evolutiva historia de la región. La habilidad demostrada por esta sociedad para absorber y asimilar influencias culturales diversas, así como su arraigada conexión con Bolivia, reflejan la identidad rica y compleja que caracteriza a la nación cruceña. Estos datos históricos y demográficos desafían los estereotipos y subrayan la capacidad de la región para adaptarse y evolucionar sin perder su esencia. La sociedad cruceña se presenta como un testimonio viviente de la unidad en la diversidad, y es este espíritu el que respalda la aspiración de autodeterminación para la región. La conexión con la tierra, con la Pachamama o Madre Tierra que nutre y sostiene, ejerce una influencia poderosa en la formación de la identidad cruceña. La hospitalidad y la productividad inherentes a la tierra han generado una alegría y un sentido de pertenencia que definen a los cruceños.





En el horizonte de los próximos años, se vislumbra una consolidación de las características propias de la nación cruceña. La proporción en aumento de cruceños con raíces fuera de Santa Cruz refuerza aún más la naturaleza expansiva de la identidad y el duradero atractivo de los valores y tradiciones. Esta tendencia apunta a una evolución que culminará en un fortalecimiento aún más sólido de la nación cruceña.

La autodeterminación propuesta como solución para lograr una representación y participación ampliadas en las decisiones que afectan a la nación cruceña no es un empeño simple ni de corto plazo. Se reconoce la complejidad del proceso y los desafíos que conlleva, pero se afirma con firmeza que la reescritura de la Constitución es el camino adecuado para dar voz a las aspiraciones y garantizar que la identidad cruceña quede reflejada en el marco legal que guía la convivencia con otras naciones bolivianas.

En suma, este capítulo subraya cómo la sociedad cruceña se basa en valores de inclusión, libertad, libre mercado, crecimiento sostenible y cuidado del medio ambiente. La singular identidad y la profunda conexión con la tierra brindan una base sólida para buscar una autodeterminación respaldada por principios que buscan un futuro equitativo y prometedor para todos los bolivianos. La propuesta presentada surge de esta identidad y se considera que una nueva Constitución

es la ruta ideal para asegurar un destino colectivo en armonía con los valores y deseos de la nación cruceña.

Además, en un contexto complementario, el concepto del cruceñismo emerge como una corriente de pensamiento que despierta interrogantes y análisis profundos en tiempos desafiantes. En medio de una economía afectada y una crisis palpable, este enfoque presenta la oportunidad de construir desde el pensamiento, aportando a través del diálogo constructivo y la búsqueda de consensos. La historia pasada y la participación colectiva se erigen como fundamentales para analizar con discernimiento una corriente de pensamiento. Este análisis recalca la necesidad de relacionar las ideologías con la realidad contemporánea para evitar caer en un egocentrismo académico, donde el pensamiento se limita a contrastar con la solidez de su lógica, sin abordar la experiencia vivida.

El cruceñismo, como una perspectiva para ver e interpretar el mundo y sus mecanismos de transformación, se diferencia de la cruceñidad, que refiere a la identidad. Utilizando la teoría de los clivajes de Lipset y Rokkan, se exploran elementos que parecen definir el cruceñismo, a través de un sondeo no representativo pero ilustrativo. Cuatro pilares resaltan: descentralización en la administración pública, preferencia por el libre mercado sobre la intervención estatal en la economía, búsqueda de igualdad ciudadana por encima de preferencias grupales,





y una influencia religiosa, especialmente cristiana. La visión urbana y empresarial también figura, aunque la relación con el medio ambiente y la modernidad necesita clarificación.

En última instancia, comprender y analizar el cruceñismo ofrece la posibilidad de adentrarse en las ideas y visiones que moldean nuestra sociedad. Mediante un diálogo constructivo y la búsqueda de puntos comunes, es posible contribuir al progreso de nuestra región, manteniendo la armonía con nuestra identidad y los desafíos actuales. En estos tiempos propicios para la reflexión, este enfoque puede vislumbrar un futuro más prometedor para todos los habitantes de la región cruceña.

## Refundando Bolivia a través de la Autodeterminación y una Asamblea Constituyente

El camino hacia un futuro más inclusivo, equitativo y sostenible para Bolivia exige una transformación profunda y significativa. En este cuarto capítulo, se explora el camino hacia la refundación del país a través de un enfoque basado en la autodeterminación y la convocatoria a una asamblea constituyente. La necesidad de esta transformación se origina en la convicción de que, si seis de cada diez cruceños están de acuerdo en la necesidad de refundar Bolivia, es posible convocar una asamblea constituyente a través de un iniciativo popular respaldado por el 20% de los electores

del padrón, quienes en la actualidad probablemente representan alrededor del 60% de los electores de Santa Cruz.

La esencia de esta propuesta se sustenta en la noción de que el sólido consenso que prevalece entre los ciudadanos de Santa Cruz en relación con la imperante necesidad de reconfigurar el panorama nacional no es mera casualidad, sino un indicio de un sentimiento más amplio que permea en la sociedad boliviana en su conjunto. Desde esta perspectiva, se plantea una iniciativa que no solo busca empoderar a la región de Santa Cruz, sino también reconocer y dar voz a los anhelos y aspiraciones de todos los sectores de la sociedad boliviana. Es en este contexto que se propone la activación del mecanismo de iniciativa popular como vehículo para convocar a una asamblea constituyente y presentar a Bolivia la crucial interrogante: ¿Está dispuesta a someterse a un proceso de refundación en el marco de una plurinacionalidad efectiva que reconozca a las naciones surgidas en los tiempos republicanos?

El fundamento subyacente en esta propuesta radica en la firme creencia de que la inquietud por una reestructuración profunda y significativa del país es compartida por una gran mayoría de ciudadanos a nivel nacional. En consecuencia, se postula que el uso de la iniciativa popular para impulsar una asamblea constituyente constituye una expresión genuina de democracia participativa y de la voluntad ciudadana. La





convicción es que la necesidad de un cambio trasciende las fronteras de Santa Cruz y se enraíza en la misma esencia de Bolivia como nación. Es vital que dicha convocatoria responda a criterios de proporcionalidad de los ciudadanos habitantes en el territorio boliviano, sin desconocer la preexistencia de las naciones originarias indígenas campesinas.

Es esencial, sin embargo, reconocer la complejidad inherente al proceso de convocatoria y ejecución de una asamblea constituyente. Esta empresa requiere una planificación meticulosa y un enfoque estratégico para abordar los desafíos y obstáculos que seguramente se presentarán en el camino. Antes de poner en marcha el mecanismo de la iniciativa popular, podría ser imperativo llevar a cabo un trabajo previo, tal vez a través de mecanismos de representación y participación ciudadana, que permita a los cruceños, y en última instancia a todos los bolivianos, discutir y deliberar sobre las condiciones y prioridades que deben ser establecidas en la nueva Constitución. Esta fase de preparación se concibe como un espacio para el diálogo genuino y constructivo, donde se aborden los temas que preocupan y se construyan los cimientos para el proceso constituyente.

La meta que se persigue con esta etapa preparatoria es trascender las diferencias y trabajar hacia un consenso que sea lo más inclusivo posible. Los cruceños, así como los ciudadanos de todas las regiones de Bolivia, deben tener la oportunidad de expresar sus visiones

y perspectivas sobre el futuro de la nación. De esta manera, se podrá construir un marco constitucional que refleje y respete la diversidad de identidades y culturas que componen el tejido social boliviano. Esta tarea es esencial para definir las condiciones y parámetros necesarios para la autodeterminación, no solo de Santa Cruz, sino de todas las regiones, en un contexto donde Bolivia se redefine como una nación plurinacional y verdaderamente inclusiva.

Es crucial subrayar que la propuesta no parte de la premisa de un aislamiento separatista, sino de un anhelo compartido de forjar un futuro más justo y equitativo para todos. La refundación de Bolivia, en este enfoque, no significa desmantelar la unidad nacional, sino reconstruir sus bases sobre la fundación sólida de la participación ciudadana, el respeto a la diversidad y la justicia social. La refundación no se trata de crear divisiones, sino de empoderar a las diferentes regiones y sectores de la sociedad para que tengan un rol activo y determinante en la construcción de la nueva Bolivia.

Esta propuesta encuentra su razón de ser en la convergencia de voluntades que clama por una transformación profunda en Bolivia. El uso de la iniciativa popular para convocar a una asamblea constituyente no es solo una reivindicación de la voz ciudadana, sino un reconocimiento del deseo generalizado de refundar el país en un marco de plurinacionalidad efectiva. Sin embargo, se entiende que este proceso requiere una





preparación exhaustiva, un espacio para el diálogo inclusivo y la construcción de consensos. El objetivo es sentar las bases para la autodeterminación y el futuro de la nación cruceña y de todas las regiones de Bolivia, en el contexto de una refundación que honre la diversidad y la unidad de la nación. En estas tareas, el rol del Comité Cívico Santa Cruz es vital mínimamente como articulador e idealmente como actor político.

Es crucial considerar que este proceso de autodeterminación y refundación debe ser pensado no solo para el presente, sino también para el futuro. En un mundo que enfrenta una revolución tecnológica que cambiará fundamentalmente la forma en que vivimos y nos relacionamos, es imperativo que las decisiones que se tomen sean pertinentes y adaptativas a este nuevo entorno. Dejar la decisión sobre cómo enfrentar estos desafíos en manos de personas que no comparten nuestras aspiraciones y deseos puede ser riesgoso tanto para nosotros como para aquellos que tienen diferentes perspectivas en la diversidad de los bolivianos.

La propuesta no solo busca la autodeterminación de la nación cruceña, sino también reconoce que otras regiones pueden tener aspiraciones similares. Se plantea la posibilidad de que naciones como la Cochabambina, Chapaca, Chaqueña y Potosina también busquen su propio espacio de decisión y representación en una Bolivia refundada. Esta visión plurinacional se alinea con

el reconocimiento de la diversidad cultural y geográfica del país.

La perspectiva presentada en este capítulo es la de una asamblea constituyente convocada por la ciudadanía como el único camino hacia la refundación de Bolivia. A través de este proceso, se espera que se reconozca oficialmente la existencia de la nación cruceña y se garantice un proceso interno dentro de la asamblea para canalizar adecuadamente las voces y deseos de sus electores en la configuración del nuevo estado.

Es importante resaltar que esta propuesta está arraigada en principios democráticos y participativos. La convocatoria a una asamblea constituyente a través de un iniciativo popular refleja la voluntad de la mayoría y la búsqueda de una solución que incluya a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, en caso de que esta propuesta democrática no se pueda llevar a cabo de acuerdo con lo previsto en la Constitución, se abre la posibilidad de explorar otras vías para garantizar que las decisiones sean tomadas por un grupo de personas que tengan en cuenta el bienestar y los intereses de la nación.

En resumen, este capítulo destaca el camino hacia la refundación de Bolivia a través de la autodeterminación y la convocatoria a una asamblea constituyente. La firme convicción de que una mayoría de cruceños y bolivianos está a favor de esta refundación impulsa





la propuesta de activar un mecanismo de iniciativa popular para convocar la asamblea. Se busca que este proceso democrático y participativo permita definir las condiciones y prioridades para la autodeterminación y el futuro de la nación cruceña y de otras regiones que compartan aspiraciones similares. Con un enfoque en la adaptabilidad y pertinencia a un mundo en constante cambio, esta propuesta es un llamado a la construcción de un futuro más prometedor y justo para Bolivia.